ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO

DE 28 DE MARZO DE 2006

En el Salón de Sesiones del Edificio La Caleta, a veintiocho de marzo de dos mil seis, siendo las diez horas y diez minutos se reúne el Pleno de la Excm. Diputación de Granada para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Presidente de la Corporación Don Antonio Martínez Caler, del Grupo Socialista, con la asistencia de los señores/as Diputados/as:

Grupo Socialista: Don Gabriel Cañavate Maldonado, Vicepresidente Primero; Doña Juana M^a Rodríguez Masa, Vicepresidenta Segunda; Don Andrés Ruiz Martín, Vicepresidente Tercero; Don Fabián S. Almenara García; Dña. Francisca González Luján; Dña. Yolanda Ibáñez Ávila; Dña. Inmaculada López Calahorro; Don José López Gallardo; Don Mariano José Lorente García; Dña. Olga Manzano Pérez; Dña. M^a Belén Navarro Navarro; Dña. Inmaculada Oria López y Don Miguel Fulgencio Torres Maldonado.

Grupo Popular: Don Antonio Carvajal Pérez; Don Juan Luis González Montoro; Don Antonio Jesús Granados García; Don Cecilio Martín García; Don Francisco Javier Maldonado Escobar; Don Jesús Avelino Menéndez Fernández; Don José Antonio Robles Rodríguez; Don Manuel Rodríguez Garrido; Dña. Concepción Roldán García; Don Francisco Saavedra Fernández y Don Rafael Vicente Valero Rodríguez.

Grupo IULV-CA: Don Julio Miguel Bernardo Castro.

Secretario General: Don José González Valenzuela.

Interventor: Don Luis Fernando del Campo Ruiz de Almodóvar.

Se excusa la ausencia de Don Miguel Fernández Almenara, Diputado Provincial de IULV-CA.

Antes de iniciar la sesión y en cumplimiento de la Declaración Institucional aprobada en la sesión celebrada el 23 de noviembre de 2000, el Pleno guarda un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género.

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LAS SESIÓN DE 2 DE MARZO DE 2006.

Dada cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria de 2 de marzo de 2006, el Pleno, por unanimidad, acuerda su aprobación.

2º.- PROPUESTA DE RED PROVINCIAL A INTEGRAR EN EL CATÁLOGO DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA.

El artículo 13.10 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz. En desarrollo de estas competencias se aprobó por el Parlamento de Andalucía la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía; en su artículo 3 define la Red de Carreteras de Andalucía que está constituida por las carreteras que discurriendo íntegramente por el territorio andaluz no están comprendidas en la red de Carreteras del Estado y se encuentran incluidas en el Catálogo de Carreteras de Andalucía. De acuerdo con el mismo artículo de la ley, la Red de Carreteras de Andalucía está formada por las categorías de Red Autonómica y Red

Provincial, en la que se integra la red viaria de titularidad de la Junta de Andalucía y la red de titularidad de las Diputaciones Provinciales respectivamente.

El artículo 17 de la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía define el Catálogo de Carreteras de Andalucía como el instrumento de carácter público que sirve para la identificación e inventario de las carreteras que constituye la Red de Carreteras de Andalucía, tanto las carreteras que componen la red autonómica como la red provincial, siendo competente el Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, conforme al apartado 4 del artículo anteriormente reseñado.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de septiembre de 2005 se aprobó la Red autonómica a integrar en el Catálogo de Carreteras de Andalucía y se crearon las comisiones Mixtas de Transferencias entre la Junta de Andalucía, representada por la Consejería de obras Públicas y Transportes, y cada una de las Diputaciones Provinciales, para la elaboración de los acuerdos de traspaso sobre las carreteras que cambian de titularidad entre ambas Administraciones en base a criterios de racionalización y de eficacia.

En cumplimiento del acuerdo de 6 de septiembre de 2005 se constituyó la Comisión Mixta Junta de Andalucía-Diputación Provincial para comenzar a elaborar los acuerdos de traspaso y se iniciaron por parte de la Diputación Provincial de Granada los trabajos de elaboración de las propuestas sobre las carreteras de la Red Provincial, así como la asignación de matrícula a las propuestas sobre las carreteras de la Red Provincial, así como la asignación de matrícula a las mismas en base a los criterios establecidos por la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Esta propuesta no es más que un principio de poner en marcha un sistema, como es el referido al Catálogo, que dé seguridad jurídica a lo que será la red provincial, sin perjuicio de la periódica actualización de la misma en función de las

circunstancias permanentemente cambiantes del propio territorio, tal como se regula en el apartado 6 del artículo 17 de la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía, que indica que se actualizará anualmente el Catálogo, incorporando las modificaciones puntuales que se produzcan, lo que nos permitirá un instrumento que además de riguroso en el tratamiento de las carreteras sea lo suficientemente ágil, como para poder recoger las demandas sociales que en cada momento se produzcan, proponiendo los correspondientes cambios al amparo del párrafo segundo del apartado 5 del mismo artículo 17 señalado.

A la vista de lo anterior y del informe emitido por el Jefe del Servicio de Carreteras y teniendo en cuenta los criterios sobre la red y su matriculación, el Sr. Vicepresidente Primero, Delegado del Área de Cooperación Local y Desarrollo, eleva al Pleno la siguiente PROPUESTA:

PRIMERO.- Proponer a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía la Red Provincial a integrar en el Catálogo de Carreteras de Andalucía que figura como anexo al presente Acuerdo, y en la que se asignan las correspondientes matrículas.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

TERCERO.- Facultar a Sr. Presidente de la Diputación tan ampliamente como fuere necesario en derecho, para la ejecución del presente acuerdo.

Consta en el expediente dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Cooperación Local y Desarrollo en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2006.

Abierto el turno de intervenciones por la Presidencia, interviene en primer lugar Don Francisco Maldonado Escobar, del Grupo

Popular, para anunciar el voto en contra por varios motivos. En primer lugar, dice, se trata de un asunto histórico, no por la propuesta sino por el tiempo que lleva rodando ya que este catálogo hace 20 años que debería de estar hecho y al final de cuentas venimos a aprobar una propuesta que se hizo en el año 2002 exactamente igual. Por otra parte, una vez analizado el documento se aprecian bastantes errores y muchas carreteras que no se incluyen, que quedan en terreno de nadie, quedan como mantenimiento para los municipios y siempre les toca a los que menos ponen y menor recursos tienen porque si nos damos una vuelta por la comarca de la Alpujarra y vemos que no aparece la carretera de Lobras, o la de Pinos del Valle, Izbor a la A-44, etc; quedan bastantes carreteras prioritarias y que sin embargo no aparecen en este catálogo, con lo cual, después de estar hablando de carreteras durante 20 años, dejamos sin solución a los pueblos más pequeños, a los que menos recursos tienen y por otro lado estamos destinando dinero del POL a arreglar calles de municipios con un alto poder adquisitivo y unos grandes presupuestos, como puede ser Atarfe o Armilla. Por estos y otros muchos motivos, como que la Diputación también se va a quedar con la carretera de Quentar al Pantano (26 km.) y también va a asumir la de Huetor Tájar Montefrío y otras más que entendemos son carreteras que deberían de quedarse en el catálogo de la Junta, por el mantenimiento y el tráfico que tienen. Por otro lado vemos bien que la carretera de la Cabra, que nunca tenía que haber sido de la Diputación, se transfiera a la Junta, al igual que la del Puerto de la Ragua, aunque eso no quita que al final hemos hecho un cambio para quedarnos como estábamos. Por lo tanto consideramos que la propuesta que se presenta al Pleno no es nada positiva para esta Diputación.

El Portavoz del Grupo Socialista, Don Gabriel Cañavate Maldonado, expone que es la primera vez que por ley aparece un ámbito competencial de las Diputaciones y este es un hecho histórico importante. Recuerda al Sr. Maldonado que dentro de los cometidos que tienen las Diputaciones, este desgraciadamente estaba sin regular, se hacía porque venía de tiempo inmemorial pero había una ley que se había comprometido y que ya se ha hecho. Aclara también que la documentación de la Comisión Informativa se la hizo llegar al Grupo Popular fundamentalmente para que los miembros de este Grupo tuviesen tiempo para poder formular las propuestas que estimasen oportunas. Por otra parte, las dos carreteras de la Diputación más importantes, de más coste y además supramunicipales, supralocales y supracomarcales

como son la carretera de la Cabra y de la Ragua, de una vez por todas se las podemos pasar a la Junta es un hecho muy importante. El compromiso de este Equipo de Gobierno, dice, es ir revisando este precatálogo año tras año y que se vaya viendo en la Comisión de Cooperación Local y Desarrollo. Hay un total de 146 km. de carreteras (la GR- 3300 de Albuñuelas a Restábal, la de Estación de Illora, el tramo de Valderrubio a Escóznar) que no tenía asumidas esta Diputación y que por ley nos comprometemos a ayudar a los municipios pequeños. Por supuesto que podían ser 200 km. y 400 tal vez, pero vamos a dar un paso muy cualitativo y cuantitativo en asumir 80 km. más y sobre el acuerdo de la Junta de Andalucía, saben ustedes que nosotros les transferimos más carreteras, 201 km. mientras que ellos nos traspasan 156 km. Por lo tanto el cómputo global es favorable en menos km. para la Diputación, lo que nos ha permitido poder asumir más km. de la red. Hacer un catálogo de competencia de la Diputación debería venir apareado de un tema presupuestario, tenemos que tener los pies en el suelo y ver si con el presupuesto que tenemos aprobado podemos asumir esa responsabilidad. En definitiva, efectivamente es un hecho histórico muy importante, que podrá ser mejorable este catálogo pero no viniendo ustedes hoy diciendo que no están de acuerdo porque se podían haber puesto más carreteras; yo les he dado el tiempo suficiente para haber hecho una propuesta previa a la comisión informativa.

A continuación Don Julio Bernardo Castro, de IULV-CA, anuncia el voto favorable de su Grupo toda vez que el Sr. Vicepresidente ha mostrado su disposición para que este catálogo esté abierto para nuevas posibles incorporaciones.

El Sr. Maldonado Escobar, en cuanto a la intervención del Sr. Cañavate de que por fin se va a poder arreglar el tema de las carreteras, dice que el Partido Socialista lleva gobernando 25 años la Junta de Andalucía y la Diputación, por lo tanto si no ha habido ley y hay un culpable, no hay más que un signo político que es el Partido Socialista. Reitera que se dejan carreteras a Ayuntamientos que no pueden asumir. En cuanto al documento que se les ha entregado y que aclara que a él le llegó el mismo día de la convocatoria, un día o dos antes de que se celebrara la comisión, aparece que el catálogo inicial de carreteras

provinciales 1.146 km. y el definitivo 1238 km., y esto me lo han dado ustedes y les repito que es la misma propuesta que había firmada entre la Junta y en anterior Presidente de la Diputación en el año 2002. Yo no se por qué viene 4 años después la misma propuesta. En cuanto al ofrecimiento de que la Comisión de Cooperación sea la Comisión técnico-política, creo que se aprobó en este Pleno esta comisión, aunque creo que no se ha reunido ninguna vez. Ustedes pretenden que nos estudiemos un plan en dos días mientras que ustedes llevan cuatro años dándole vueltas. Hemos visto errores que trasladamos al Pleno y hubiera sido conveniente una reunión monográfica entre los Grupos Políticos y poder haber participado. Ustedes son los que gobiernan y tienen que administrar el dinero y destinarlo a las prioridades de la provincia porque ustedes son los que están gobernando además con mayoría absoluta.

Para cerrar el debate, la Presidencia concede nuevamente la palabra al Sr. Cañavate alegando que el Portavoz del Grupo Popular no ha aportado nada nuevo en esta segunda intervención, aunque sí ha quedado bastante claro su incoherencia ya que por un lado acusa al Equipo de Gobierno de que el precatálogo es lo mismo que en el 2002 y por otro lado dice que desconocía las propuestas. Aclara que el día 16 se le entregó personalmente al Grupo por parte del Coordinador del Área la propuesta de carreteras precisamente para que tuviesen tiempo de hacer una propuesta alternativa y señala que cuando se quiere llegar a acuerdos en la mesa de negociación hay que escuchar a los que se sientan con uno, y esto quiere decir que no lo puede hacer solo la Diputación sino que tiene que hacerlo con la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Es por tanto un hecho histórico importante en lo que concierne a lo político y a lo jurídico porque da seguridad jurídica a esta Diputación y sobre todo a los ciudadanos que cuando vayan por una carretera que sepan de una vez por todas de quien es esa carretera, quien es el responsable de señalarla y de mantenerla, sobre todo con un objetivo final, que debe ser mejorar las condiciones de nuestras carreteras de la red provincial porque realmente son las arterias del conjunto de la provincia.

A continuación la Presidencia somete a votación la Red Provincial a integrar en el Catálogo de Carreteras de Andalucía que figura

como anexo en el expediente, siendo su resultado como sigue:

Votos a favor: 15 (PSOE, IULV-CA)

Votos en contra: 11 (PP)

Abstenciones: ninguna.

Por consiguiente, el Pleno, por mayoría, ACUERDA:

PRIMERO.- Proponer a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía la Red Provincial a integrar en el Catálogo de Carreteras de Andalucía que figura como anexo al presente Acuerdo, y en la que se asignan las correspondientes matrículas.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

TERCERO.- Facultar a Sr. Presidente de la Diputación tan ampliamente como fuere necesario en derecho, para la ejecución del presente acuerdo.

3º.- PROPUESTA DE COMPROMISO DE COFINANCIACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS.

A la vista de los escritos remitidos por el Director General para las Drogodependencias y Adiciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de fecha 2 de diciembre de 2005 y de 4 de enero de 2006 en que se nos comunica la voluntad de dicha Consejería de continuar con la cooperación mutua de ambas Instituciones que se inició en 1986,

mediante la suscripción de un Convenio de colaboración para dos años con la intención de dar estabilidad a dicha colaboración y garantizar el desarrollo de programas y actividades sobre drogodependencias y adicciones en la Provincia de Granada, la Sra. Vicepresidenta Segunda, Delegada del Área de Bienestar y Derechos de la Ciudadanía, eleva al Pleno la siguiente PROPUESTA:

Que se asuma el compromiso de cofinanciación de estos dos ejercicios presupuestarios (2006-2007) para poder realizar la tramitación de un Convenio de Colaboración por dos años, cuya aportación por parte de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2006 será por una cuantía de novecientos veinticinco mil, novecientos cincuenta y seis euros (925.956 €) el 60,98% del valor del proyecto, y por parte de esta Diputación de quinientas noventa y dos mil, seiscientos quince euros con treinta y seis céntimos (592.615,36 €), el 39,02% del coste total de proyecto cuya cuantía asciende a 1.518.571,36 euros (presupuesto ya aprobado en el Pleno para este ejercicio); y para el 2007 la cantidad de novecientos cuarenta y cuatro mil, cuatrocientos setenta y cinco euros (944.475 €) por parte de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y por parte de esta Diputación de Granada un porcentaje equivalente sobre la subvención concedida con la salvedad de las posibles modificaciones que puedan producirse para el ejercicio 2007.

Constando en el expediente dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Bienestar y Derechos de la Ciudadanía, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2006, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta formulada en el sentido expresado.

4º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3/2006.

Dada cuenta las peticiones realizadas por las distintas Areas y

Delegaciones referentes a la modificación del presupuesto 2.006, y visto el expediente tramitado al efecto, donde consta evacuado Informe Jurídico y de Intervención, el Sr. Vicepresidente Tercero, Delegado del Área de Economía, Hacienda y Personal, PROPONE:

Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 3/2006, de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y bajas por anulación, cuyo resumen por Capítulos a continuación se detalla:

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	ALTAS	BAJAS
A) Op. Corrientes			
1	Gastos de personal		
2	Gastos en bs. corrientes y servicios		
3	Gastos financieros		
4	Transferencias corrientes		
B) Op. de capital			
6	Inversiones reales	111.830,00	1.215.673,08
7	Transferencias de capital	1.029.496,74	
8	Activos financieros		
9	Pasivos financieros		
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.141.326,74	1.215.673,08

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACION	ALTAS	BAJAS
A) Op. Corrientes			
1	Impuestos Directos		

2	Impuestos indirectos		
3	Tasas y otros ingresos		
4	Transferencias corrientes		
5	Ingresos patrimoniales		
B) Op. de capital			
6	Enajenación de inversiones reales		
7	Transferencias de capital	273.286,0	186.176,3
		3	4
8	Activos financieros		
9	Pasivos financieros		161.456,0
			3
	TOTAL PRESUP. DE INGRESOS	273.286,0	347.632,3
		3	7

Consta en el expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2006.

Abierto el turno de intervenciones, el Portavoz del Grupo Popular solicita la votación del expediente.

Efectuada la votación por la Presidencia, se produce el siguiente resultado:

Votos a favor: 15 (PSOE, IULV-CA)

Votos en contra: ninguno.

Abstenciones: 11 (PP)

Por consiguiente, el Pleno, por mayoría, acuerda aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 3/2006.

5º.- APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL ACUERDO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO.

Visto el Acuerdo plenario de fecha de 21 de marzo de 2003 de aprobación del acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Granada (B.O.P. n º 83, de fecha 11 de abril de 2003).

Resultando que con fecha de 30 de noviembre de 2004 se aprobó el Acuerdo de modernización y mejora de la gestión de Recursos Humanos en la Diputación de Granada.

Visto el contenido de dicho Acuerdo sobre vigencia y ejecución: " tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2006,(...). La Diputación de Granada promoverá las medidas necesarias para la ejecución de las previsiones obligacionales contenidas en el presente acuerdo, así como para la materialización de las líneas estratégicas de actuación que en el mismo se recogen. Los artículos que pudieran resultar afectados como consecuencia de la aplicación del presente acuerdo (...) serán nuevamente redactadas en el seno de la Mesa Negociadora. En caso de que para 2006 se estableciera en el ámbito de la Administración General del Estado alguna medida específica de naturaleza económica y/o sobre condiciones de trabajo que mejore para dicho ejercicio lo recogido en el presente Acuerdo, la CIV adoptará la misma realizando la reforma pertinente".

Vista la propuesta de modificaciones por la Comisión Técnica en su reunión de 14 de abril de 2006 y consensuada por unanimidad de los asistentes, en representación de U.G.T., CC.OO., C.S.I.-C.S.I.F. y la Delegación de Recursos Humanos y Parque Móvil

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes

de la ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Resultando que de dicho Acuerdo – Marco de Modernización y mejora de la gestión de Recursos Humanos se deriva la necesaria adaptación del Acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de la Diputación de Granada, así como de la incorporación de diversas reformas legales producidas desde el año 2003 al 2006, particularmente la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Orden APU/3902/2005, de 15 de diciembre por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación por el que se establecen, entre otros extremos, la mejora de las condiciones de trabajo.

En uso de las atribuciones conferidas legalmente por el art 29 a) del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril T.R.R.L en relación con el artículo 33 de la ley 7/1985, de 2 de abril R.B.R.L, la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, formula al Pleno de la Corporación, previo su sometimiento a la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal, la siguiente PROPUESTA:

Primero: Aprobar el texto de las modificaciones del vigente Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario al servicio de la Excma. Diputación Provincial de Granada para el período 2004-2006, que se acompaña como Anexo en el expediente.

Segundo: Disponer la publicación en el Boletín de la Provincia de las modificaciones del acuerdo, dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 36 de la ley 9/1987.

Constando en el expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal en sesión

celebrada el día 22 de marzo de 200, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta formulada en el sentido expresado.

6º.- APROBACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA 2006.

Visto el Acuerdo plenario de fecha de 25 de febrero de 2003 de aprobación del convenio colectivo del personal laboral de la Excm. Diputación Provincial de Granada (B.O.P. n º 105, de fecha 10 de mayo de 2003)

Visto el Oficio de la Sra. Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil presentado ante la autoridad Laboral comunicando la denuncia formal del convenio, a los efectos pertinentes.

Resultando que con fecha de 30 de noviembre de 2004 se aprobó el Acuerdo de modernización y mejora de la gestión de Recursos Humanos en la Diputación de Granada.

Visto el contenido de dicho acuerdo sobre la vigencia y ejecución: " tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2006,(...). La Diputación de Granada promoverá las medidas necesarias para la ejecución de las previsiones obligacionales contenidas en el presente acuerdo, así como para la materialización de las líneas estratégicas de actuación que en el mismo se recogen. Los artículos que pudieran resultar afectados como consecuencia de la aplicación del presente acuerdo (...) serán nuevamente redactadas en el seno de la Mesa Negociadora. En caso de que para 2006 se estableciera en el ámbito de la Administración General del Estado alguna medida específica de naturaleza económica y/o sobre condiciones de trabajo que mejore para dicho ejercicio lo recogido en el presente Acuerdo, la

CIV adoptará la misma realizando la reforma pertinente".

Vistos los acuerdos adoptados tras la negociación llevada a cabo en el seno de la Comisión técnica, el pasado 14 de marzo de 2006, entre la representación de U.G.T., CC.OO, C.S.I-C.S.I.F y la Delegación de Recursos Humanos y Parque Móvil.

De conformidad con lo dispuesto en el Título III del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y la ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical.

Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo , sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.

En uso de las atribuciones conferidas legalmente por el art 29 a) del R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril T.R.R.L en relación con el artículo 33 de la ley 7/1985, de 2 de abril R.B.R.L, la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, a Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, formula al Pleno de la Corporación, previo su sometimiento a la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal, la siguiente PROPUESTA:

Primero: Aprobar el texto del convenio Colectivo Único del Personal laboral al servicio de la Excm. Diputación Provincial de Granada para el período 2004-2006, que se incorpora como Anexo a la presente propuesta .

Segundo: Remitir el texto del Convenio Colectivo Único del

Personal laboral al servicio de la Diputación de Granada al servicio de Administración Laboral de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para su registro en esa Delegación Provincial, y depósito, así como disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

Constando en el expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2006, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta formulada en el sentido expresado..

7º.- APROBACIÓN DE MODIFICACIONES PUNTUALES DEL REGLAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA DIPUTACION DE GRANADA.

Visto el Reglamento de Acción Social para el personal Funcionario y Laboral de la Excm. Diputación Provincial de Granada, aprobado en sesión plenaria de 28 de junio de 2005, así como el acuerdo plenario de modificación puntual del mismo, de fecha

Vistas las sesiones celebradas por Comisión Mixta Paritaria de Acción Social, según las actas levantadas a tal efecto y previas las deliberaciones y acuerdos adoptados en el seno de la misma .

Resultando que de las mismas se adoptó acuerdos de modificación del Reglamento de Acción Social para el Personal funcionario y Laboral de la Excm. Diputación Provincial de Granada sobre modificación de aquellos extremos que planteaban cuestiones susceptibles de mejora para la eficaz y adecuada gestión de la concesión de las ayudas, así como de dotar una estructura más sistemática al Programa de Intervención Social.

Examinada la propuesta de modificaciones por la Comisión de Acción Social en su reunión de 14 de abril de 2006 y consensuada por unanimidad de los asistentes, en representación de U.G.T., CC.OO., C.S.I.-C.S.I.F. y la Delegación de Recursos Humanos y Parque Móvil

Visto el informe emitido por la jefa de sección de Administración de Recursos Humanos la Delegación de Recursos Humanos y Parque Móvil de fecha de 14 de marzo de 2006

En uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, la Sra. Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil formula para su dictamen por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal y su aprobación por el Pleno, la siguiente PROPUESTA:

Primero: Se modifica el Reglamento de Acción Social para el Personal funcionario y laboral en los siguientes términos:

I) El apartado 1 (Atención a la Familia) del Capítulo I del Título II (Programa de Intervención Social-Ayudas de Acción Social) queda redactado como sigue:

"1. Atención a la Familia.

1.1 El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo, así como el personal funcionario interino o laboral eventual con más de un año acumulado de servicios prestados en la Diputación Provincial de Granada, que tenga hijos o hijas menores de 18 años percibirá una ayuda a tanto alzado, según la cuantía determinada para cada ejercicio, destinada a sufragar parcialmente los gastos derivados del cuidado de los mismos y gastos escolares.

La ayuda se percibirá tanto en las situaciones de maternidad y paternidad como de adopción o acogimiento familiar, tanto preadoptivo como permanente, una vez tenga lugar la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Procederá la concesión de una sola ayuda cuando los dos padres sean personal de la Diputación Provincial de Granada.

Para el ejercicio en que se cumpla la edad de 18 años se abonará la cantidad correspondiente a dicha anualidad completa, siempre que no tenga derecho a percibir la ayuda para la misma anualidad correspondiente a Atención a la Familia Tipo II, en cuyo caso aquélla se abonará proporcionalmente a los meses previos al cumplimiento de la mayoría de edad y, con posterioridad, se abonará en su caso la diferencia en más si la hubiere que pueda corresponder por el Tipo II.

La solicitud deberá acompañarse de copia completa compulsada del Libro de Familia o documentación acreditativa de la convivencia y dependencia..

1.2 El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo, así como el personal funcionario interino o laboral eventual con más de un año acumulado de servicios prestados en la Diputación Provincial de Granada, percibirá una ayuda a tanto alzado, según la cuantía determinada para cada ejercicio, cuando este personal, su cónyuge o pareja de hecho inscrita que conviva con aquel, hijo o hija mayor de 18 años, curse estudios de enseñanzas superiores regladas, destinada a sufragar parcialmente los gastos de matrícula y adquisición de material didáctico.

Se entenderán como tales enseñanzas las que a su término den derecho a la obtención de un título académico oficial expedido por Ministerio de Educación o las Universidades, exceptuándose los

masters, cursos de extensión universitaria y cursos de postgrado.

La persona beneficiaria de esta modalidad de ayuda deberá encontrarse matriculada y cursando estudios superiores oficiales en el año académico que establezca cada convocatoria. La repetición total o parcial de un curso académico no da derecho a la presente ayuda por estudios.

La cuantía de esta ayuda será como máximo por el importe pagado en concepto de liquidación de precios públicos. La Comisión de Acción Social podrá establecer criterios de proporcionalidad en función de los precios públicos efectivamente satisfechos.

Cuando se trate de estudios becados, y/o por ser miembro de familia numerosa sólo se abonará el importe del precio público realmente abonado. En todo caso no se concederá ayuda para estudios superiores o universitarios cuando la cuantía solicitada sea inferior a 6,13 €. Dicha cantidad se aumentará anualmente en el mismo porcentaje que marque la Ley de Presupuestos Generales del Estado como incremento previsto del IPC.

Procederá la concesión de una sola ayuda cuando los dos padres sean personal de la Diputación Provincial de Granada.

Las ayudas correspondientes a esta modalidad son incompatibles con la percepción de otras de naturaleza similar concedidas por cualquier organismo o entidad públicos o privados para el mismo año académico, salvo que fueran de cuantía inferior al importe pagado en concepto de liquidación de precios públicos en cuyo caso, si se acreditan documentalmente su naturaleza y cuantía y se reúnen los requisitos establecidos podrá solicitarse ayuda por la diferencia.

Asimismo las personas beneficiarias de esta ayuda (cónyuges, parejas de hecho, hijos) no podrán tener ingresos superiores al Salario Mínimo Interprofesional.

La solicitud deberá acompañarse de:

- Copia compulsada del resguardo de matrícula y la liquidación de precios públicos correspondiente.
-
-
- Certificación expedida por el centro en que se realicen los estudios, donde consten los créditos cursados y si se trata de primera matrícula o repetición de crédito.
-
-
- Declaración jurada de que no se perciben otras ayudas de naturaleza igual o similar a la de esta modalidad concedidas por cualquier organismo o entidad públicos. En caso contrario, deberá aportarse certificado expedido por tales entidades y/u organismos acreditativo de si han percibido o perciben tal ayuda y su cuantía.
-
-
- Si la ayuda se solicita para el cónyuge, pareja de hecho inscrita, hijo o hija mayor de 18 años, certificación de los ingresos brutos anuales que consten en la base imponible de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas o acreditación de los mismos si se perciben y no se está obligado a efectuar dicha declaración."
-

II) El apartado 2 (Atención a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial) del Capítulo I del Título II (Programa de Intervención Social-Ayudas de Acción Social) queda redactado como sigue:

"2. Atención a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

Para la atención compensatoria de los gastos que pueda generar a la unidad familiar la existencia de algún miembro con discapacidad física, psíquica o sensorial en los términos expuestos a continuación o incapacitada absoluta, se abonará al personal que lo solicite una ayuda de tracto sucesivo mensual, en tanto en cuanto la declaración oficial sea válida, según la cuantía determinada para cada ejercicio. Para el ejercicio de 2005 dicha cantidad será de 181,83 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar con tal discapacidad.

Podrá beneficiarse de esta ayuda el personal funcionario, eventual e interino, que padezca una discapacidad, así como su cónyuge, pareja de hecho inscrita e hijos e hijas que estén afectados de dicha discapacidad, convivan con aquél y, cuando sean mayores de edad, no tengan ingresos superiores al Salario Mínimo Interprofesional.

Se entenderá que concurre alguna discapacidad cuando se acredite una minusvalía en un grado igual o superior al 33 por 100, de conformidad con el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

Las ayudas correspondientes a esta modalidad son incompatibles con la percepción de otras de naturaleza similar concedidas por cualquier organismo o entidad públicos o privados para el mismo ejercicio, salvo que fueran de cuantía inferior al importe que se percibiría por esta modalidad en cuyo caso, si se acreditan documentalmente su naturaleza y cuantía y se reúnen los requisitos establecidos podrá solicitarse ayuda por la diferencia.

Junto a la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:

-
- Acreditación oficial de la minusvalía.
-
-
- Si la ayuda es solicitada para el cónyuge, pareja de hecho, hijos o hijas mayores de 18 años, certificación de los ingresos brutos anuales que consten en la base imponible de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas o acreditación de los mismos si se perciben y no se está obligado a efectuar dicha declaración.
-
-
- Declaración jurada de que no se perciben otras ayudas de naturaleza igual o similar a la de esta modalidad concedidas por cualquier organismo o entidad públicos. En caso contrario, deberá aportarse certificado expedido por tales entidades y/u organismos acreditativo de si han percibido o perciben tal ayuda y su cuantía.
-
-
- Copia completa compulsada del Libro de Familia, cuando corresponda.
-
-
- Certificado de empadronamiento cuando corresponda, donde consten las personas convivientes con el solicitante.
-

La documentación correspondiente a la minusvalía reconocida, así como a la convivencia familiar e ingresos percibidos en su caso,

deberá actualizarse como condición previa para la continuidad en su percepción, con ocasión de la convocatoria pública para la concesión de las ayudas de los Programas de cada año.

La cantidad aplicable para cada mensualidad se aumentará anualmente en el mismo porcentaje que marque la Ley de Presupuestos Generales del Estado como incremento previsto del IPC."

III) El apartado 3.3 del Capítulo I del Título II (Programa de Intervención Social-Ayudas de Acción Social-Ayuda para tratamientos médicos) queda redactado como sigue:

"3.3 Exclusiones.

No se contemplan bajo esta modalidad de ayuda aquellos gastos ocasionados por asistencia médica concertada con compañías aseguradoras cuando la misma se halle cubierta por el sistema público de la Seguridad Social.

No se contemplan dentro de esta modalidad de ayuda las profilaxis o limpiezas bucales.

En el supuesto de que se presente solicitud para gafas y lentillas conjuntamente, se concederá una única ayuda, tomando como referencia el importe mayor abonado.

Por cada acto médico sólo se podrá obtener una ayuda por ejercicio y persona beneficiaria, salvo que el mismo resulte necesario según prescripción facultativa, por suponer modificación respecto a la situación anterior."

En tratamientos continuados se solicitará la ayuda una vez finalizado el mismo. No obstante, en los casos de emergencia social la Comisión de Acción Social podrá estudiar un anticipo de la ayuda que pueda corresponder en su día."

IV) El apartado 3.5 del Capítulo I del Título II (Programa de Intervención Social-Ayudas de Acción Social-Ayuda para tratamientos médicos) queda redactado como sigue:

"3.5 Esta ayuda será compatible bien con la prestación económica del sistema de la Seguridad Social que pueda corresponder o bien con cualquier otra prestación o ayuda percibida en tal concepto con cargo a cualquier Institución o Entidad pública o privada, siempre que la suma de todas las percepciones no supere el 100% de los gastos sufragados.

Las personas beneficiarias de esta ayuda (cónyuges, parejas de hecho, hijos) no podrán tener ingresos superiores al Salario Mínimo Interprofesional."

V) El apartado 3.6 del Capítulo I del Título II (Programa de Intervención Social-Ayudas de Acción Social-Ayuda para tratamientos médicos) queda redactado como sigue:

"3.6 Junto a la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:

1. a. Informes médicos o sanitarios justificativos de la necesidad de los servicios médicos recibidos o de la prótesis de referencia. Para las prótesis oculares dicho informe podrá ser emitido por facultativo especialista o por especialista del establecimiento óptico.

2. Para la ayuda solicitada por intervención quirúrgica se presentará copia del informe facultativo sobre la necesidad de la intervención, así como certificado del Servicio Andaluz de Salud relativo a la no cobertura de dichos procesos del sistema público.
3. Facturas originales acreditativas de los gastos subvencionables realmente realizados, con aplicación del I.V.A correspondiente para los supuestos no exentos por la legislación correspondiente. A los efectos del impuesto a aplicar en la factura, se exceptúan las facturas correspondientes a servicios profesionales de odontólogos, mecánicos dentistas, protésicos dentales y ortopedias maxilares realizadas por los mismos, cualquiera que sea la persona a cuyo cargo se realicen dichas operaciones.
4. Copia completa compulsada del Libro de Familia cuando corresponda Certificado de empadronamiento cuando corresponda."

VI) El Capítulo II del Título II (Programa de Ocio y Tiempo Libre) queda redactado como sigue:

"Para ocio y tiempo libre, la Corporación destinará anualmente fondos, por importe de 39.000,00 euros para el año 2005, previa presentación de un programa conjunto de actividades a través del Comité de Empresa y Junta de Personal, garantizándose la participación de todos los sindicatos con representación en ambos órganos.

Dicho programa deberá presentarse en el primer trimestre de cada año.

El importe del fondo destinado al Programa de Ocio y Tiempo Libre previsto en este Capítulo se actualizará anualmente, salvo disposición expresa en contrario, en el mismo porcentaje que marque la Ley de Presupuestos Generales del Estado como

incremento previsto del IPC."

Segundo: Ordenar la exposición pública de esta modificación por plazo de treinta días para que las personas interesadas puedan formular reclamaciones y sugerencias a la misma, a partir de la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín de la Provincia en el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Constando en el expediente dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2006, el Pleno, por unanimidad, acuerda modificar el Reglamento de Acción Social para el Personal funcionario y laboral en los términos transcritos en la propuesta.

8º.- AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILIDADES

Solicitado por Dña. Carmen Carrasco Vargas, con D.N.I. 38.557.950-Z, Funcionaria Interina de esta Diputación, CON CATEGORÍA DE TRABAJADORA SOCIAL, autorización de compatibilidad para realizar actividad privada en el turno de Intervención Profesional para la adopción internacional conforme al Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Asuntos Sociales de Diplomados en Trabajo Social de la Comunidad Autónoma Andaluza, en materia de Valoración de solicitantes de Adopción Internacional.

Visto lo dispuesto en la ley 53/1984 de 26 de Diciembre de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Vista la solicitud, junto con la documentación aportada por la interesada.

Visto el informe emitido por la Jefa de Sección de Administración de Recursos Humanos, de fecha 13 de marzo de 2006.

"La Jefa de Sección abajo firmante, viene a exponer lo siguiente sobre la solicitud presentada por D.^a Carmen Carrasco Vargas, con D.N.I.: 38.557.950-Z, sobre realización de una segunda actividad, Turno de Intervención Profesional para la Adopción Internacional, del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Granada:

ANTECEDENTES DE HECHO

1. La interesada presentó su solicitud, mediante escrito, a través del registro General de Entrada, de fecha de 7 de febrero de 2006, y núm. 1018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: la determinación de la naturaleza de la actividad para la que solicita la compatibilidad, es el primer aspecto a determinar, puesto que de antemano el turno en que solicita su actividad y en que deberá incluirse la solicitante si se autoriza la actividad, esta enmarcado en el ámbito de un convenio de colaboración, establecido en la ley 30/1992, de 26 de noviembre R.J.A.P y P.A.C art 6 y siguientes, en los que se regulan las relaciones interadministrativas.

Pues bien, la Junta de Andalucía a través del citado convenio de colaboración, convenia con otra Administración de naturaleza Corporativa – Institucional -, el citado Colegio, una actuación enmarcada en el ámbito de las propias competencias de la citada Administración Autonómica, a saber; señala el artículo 3 ° del citado Convenio: Los profesionales inscritos en los turnos citados

formarán equipos con los psicólogos del turno del Colegio de Psicólogos para elaborar coordinadamente los informes necesarios, a fin de que la Consejería de Asuntos Sociales, pueda desarrollar las funciones establecidas en el acuerdo Primero del presente convenio – el objeto del presente convenio es establecer las bases de la colaboración entre los partes firmantes , en lo que respecta al estudio y valoración social de solicitantes de adopción internacional residentes en la comunidad autónoma ...-

De acuerdo con ello, en cuanto instrumento de auxilio interadministrativo, la naturaleza de la actividad para la que se solicita la compatibilidad, lo es de naturaleza pública de carácter mixto, en tanto que interviene una Administración Pública. La Junta de Andalucía, los Colegios Profesionales, y los profesionales de los mismos, para el ejercicio de la actividad que no siendo por completa pública, intervienen los psicólogos y trabajadores sociales, para el ejercicio de una actuación de intervención social, a tal efecto señala la exposición de motivos del Convenio lo siguiente: " La ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, modificada por la ley 73/1988,de 26 de diciembre, dispone que corresponde a los Colegios Profesionales ejercer las funciones que les sean encomendadas por la Administración y colaborara con esta medida la realización de estudios, la emisión de informes y otras actividades relacionadas con sus fines, que pueden serle solicitadas o acuerden por iniciativa propia".

La actividad para la que se efectúa la solicitud esta enmarcada – según la exposición de motivos- en un turno de intervención profesional, de carácter selectivo y cerrado, viene a ser así el instrumento idóneo para dar respuesta al incremento de solicitudes de adopción internacional. Dicho turno de profesionales contará con las garantías que supone una estructura colegial y un control y supervisión por parte de la Administración... -

Segundo: determinada la naturaleza de la actividad colaborada de la administración autonómica y la corporativa, conviene determinar la situación profesional del solicitante con la actividad para la que solicita la compatibilidad, así:

1. Dña. Carmen Carrasco Vargas es Funcionaria Interina de la Diputación de Granada, con efectos de 20 de abril de 2005 con la categoría de Trabajadora Social. Por consiguiente, queda afectada del régimen de incompatibilidades establecidos en la legislación vigente aplicable, al presente supuesto de hecho, a los efectos de lo establecido en la ley 53/1984, 26 de diciembre sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública, (art. 1).

1. Al tratarse, según la opinión de ésta informante, de una actividad de naturaleza mixta por parte de los sujetos convenientes, atendiendo a los principios de colaboración y eficacia, la incompatibilidad inicialmente predicada para el desempeño de otra actividad, tiene por objeto, según el citado convenio, cláusula séptima: Las intervenciones de los equipos de los profesionales formados por Trabajador Social y Psicólogo, se realizarán de forma coordinada e intersdisciplinar. Cada profesional emitirá un informe, con la correspondiente valoración... social. Además, los dos profesionales firmarán un documento conjunto, que contendrá una propuesta común motivada acerca de la idoneidad o no de el/los solicitante(s) estudiado(s). Por lo que, a los efectos de la ley de incompatibilidades se trataría de una actividad de naturaleza pública (art. 6), de carácter mixto, enmarcada en el ámbito en una relación interadministrativa de la ley 30/1992, de 26 de diciembre, y determinada por los sujetos colaborantes y ejecutantes de las obligaciones estipuladas en el convenio, y cuya actividad, en definitiva redunda en el ejercicio y ejecución de una competencia pública, de la Junta de Andalucía, en el ámbito de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Andalucía , arts. 13 y siguientes, y a tales efectos, por su parte la cláusula undécima del convenio señala que en " En ningún caso existirá relación laboral alguna entre la Consejería de Asuntos Sociales y los profesionales del turno de Intervención...". lo que confirma el carácter voluntario de la participación, por parte del colegiado que se inscriba en el citado Turno".

1. Sin embargo, el propio convenio determina en su clausulado duodécimo que: los colegiados que deseen inscribirse en la lista del turno deberán en caso de trabajar en cualquiera de las Administraciones Públicas, no estar sujeto, por el puesto desempeñado a las prohibiciones previstas en el 11.1 de la

ley 53/84, en éste sentido " el personal que realice cualquier clase de funciones en la Administración, con el desempeño de servicios de gestión administrativa...", sin hacer expresa referencia a los otros supuestos de incompatibilidad, prevista en la ley y en el Reglamento. Así en principio la actividad sería incompatible, de acuerdo con el art 11 de la ley, por el que el personal comprendido en el ámbito de aplicación no podrá ejercer por sí, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean... bajo la dependencia o al servicio de Entidades... que se relacionan directamente con las que desarrolle la Entidad donde estuviera destinado.

E Igualmente conforme al propio convenio se exige que en la cláusula duodécima que "en cualquier caso trabaje en la Administración Pública habrá de obtener la correspondiente resolución administrativa de compatibilidad dictada por el órgano competente".

Conforme a ello, y en concordancia con el art. 6 de la ley 53/84, estaría incurso en el ámbito de la ley y reglamento, y analizando el supuesto de hecho, a juicio de ésta informante se podrá reconocer la compatibilidad, porque:

1. a. La actividad pública, cuyo objeto es la colaboración, mediante el citado Turno de Intervención, establece una relación colaboradora con la Consejería de Asuntos Sociales (Junta de Andalucía), y el Colegio de Trabajadores Sociales de Granada, a través del citado Turno Profesional, al venir a dar respuesta al incremento de la demanda social de solicitudes de adopción internacional.
2. Asimismo, y en consecuencia, no existe ningún tipo de relación laboral, y por consiguiente no percibirá retribución salarial alguna por dicho concepto, al tratarse de una actividad pública, de naturaleza colaboradora de asesoramiento, como vengo señalando.
3. En consecuencia, la excepcionalidad requerida, conforme al art. 6 de la ley de incompatibilidades, vienen dada por el asesoramiento especial (a través de la emisión de informes y propuestas, en un sentido amplio del concepto de

asesoramiento), por lo que comportaría el reconocimiento de la compatibilidad, que viene acreditada por la especial cualificación del Personal del citado Turno.

4. En cuanto al requisito efectivo de la presencia en el cumplimiento de su jornada laboral ordinaria de la actividad principal, no se desprende de la documentación aportada, que tengan coincidencia de horario, manifestando que se circunscribe a algunas tardes, sin definición previa y, con carácter ocasional.
5. Además resta analizar si de acuerdo con el art. 16 apartados 1 y 3 de la ley 53/1984, se requiere para que se otorgue el reconocimiento, que el personal que desempeñe puestos que comporte la percepción del complemento específico no podrá serle reconocido, no obstante se exceptúa de la citada prohibición, para la realización de actividades de asesoramiento la misma. Por ello, al presente supuesto de hecho como sí tiene el puesto que desempeña el interesado el citado complemento, y como se trata de un actividad pública, la compatibilidad puede serle reconocida en este sentido.

f. Por su parte el convenio de colaboración manifiesta en su cláusula novena que: Los colegios Oficiales fijarán las tarifas que podrán percibir de los usuarios..., estas tarifas incluirán los honorarios de los profesionales intervinientes. En cualquier caso los colegiados inscritos en el Turno percibirán ninguna remuneración de los usuarios, en dinero o especie, distinta de la establecida. Y en su cláusula Décima dispone que: Las tarifas... se abonarán directamente a los Colegios Oficiales..., exceptuándose el importe correspondiente, si procede, de los gastos de desplazamiento que le serán abonados directamente a los profesionales por los solicitantes, estando el profesional obligado a presentar un recibo por dichos gastos.

Tercero: Por consiguiente y, atendiendo a la Sentencia del T.S.J.G. de 20 mayo 1998 (RJCA 1998\1990), cuyo fundamento jurídico único dispone: "Que la regla de la incompatibilidad del ejercicio de funciones públicas simultáneamente con el de actividades que impida o menoscabe aquél por razón de los deberes que impone o de la Ley de imparcialidad o independencia que exige (artículo 1.3 de la Ley 53, de 26 diciembre 1984

confiere a la Administración de la que los ejercientes de funciones públicas dependan una potestad calificada acertadamente de discrecional... para poder decidir sí resulta adecuado exigir o dispensar la incompatibilidad de referencia atendidas las finalidades del cometido funcional, de que se trate, en el entramado de circunstancias concurrentes en cada caso; en ese sentido, parece lógico reconocer a esa potestad un amplio ámbito en su ejercicio; pues, quién mejor que la propia Administración para señalar si la actividad tratada de compatibilizar con la propia de sus funcionarios perjudica las finalidades de ésta; bastará con que se den razones para ello, aunque haya otras de posible inducción a pensar lo contrario, para respetar el criterio de la Administración sobre el particular, como intérprete de cuál es el interés general en cada caso; y al que se ha de subordinar el interés particular del funcionario".

Concluyéndose según el parecer de ésta informante conforme a lo señalado en dicha sentencia, que como la actividad objeto de reconocimiento de compatibilidad, tiene como ámbito de actuación la intervención social, en aras al estudio y valoración social de los solicitantes de adopción internacional y, como al presente supuesto de hecho concurren los requisitos necesarios para poder autorizar la compatibilidad, y dada la naturaleza de la actividad cuyo fin va dirigido hacia un interés general, objeto de implementación, como objetivo general de actuación social de políticas generales de intervención social, en el ámbito de cooperación con otras Administraciones Públicas y agentes y colaboradores sociales, por ésta Diputación de Granada, es por lo que concluyó informando favorablemente el reconocimiento de compatibilidad, para realizar las tareas de informe y propuesta del Turno citado, para la valoración de solicitantes de adopción internacional, en el ámbito del Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y el citado Colegio Profesional.

Este es mi informe, sin perjuicio de otro más conveniente o mejor parecer a los intereses Provinciales. Es cuanto tengo obligación de informar."

Visto el art 70. 9 del R.D 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

La Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, propone a la Comisión Informativa para su dictamen y al Pleno de la Excm. Diputación Provincial de Granada, para su adopción mediante acuerdo, la siguiente Propuesta:

UNICO: Autorizar la Compatibilidad para realizar la actividad de asesoramiento en el turno de Intervención Profesional para la adopción internacional conforme al Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Asuntos Sociales de Diplomados en Trabajo Social de la Comunidad Autónoma Andaluza, en materia de Valoración de solicitantes de Adopción Internacional, a Dña. Carmen Carrasco Vargas, con D.N.I.: 38.557.950-Z, con estricta sujeción a lo dispuesto en la ley 53/1984, sobre incompatibilidades.

La presente autorización no podrá suponer modificación alguna de la jornada de trabajo y horario de la interesada y, su incumplimiento a los efectos de responsabilidad, podrá ser objeto de sanción conforme al régimen disciplinario de aplicación.

Constando en el expediente dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2006, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta formulada en el sentido expresado.

9º.- MOCIÓN DEL GRUPO IULV-CA DE CONDENA A LA OCUPACIÓN DE IRAQ.

De acuerdo con lo establecido en el ROF, Don Julio Bernardo

Castro, Diputado Provincial del Grupo IULV-CA, presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN:

Condena de la ocupación de Iraq

El próximo día 20 de marzo se cumplirán tres años de la invasión y ocupación de Iraq por parte de los Ejércitos de EEUU y Reino Unido.

Esta invasión y posterior ocupación esta significando una nueva agresión al pueblo iraquí, que ha determinado al menos la muerte de 100.000 personas y 800.000 heridos como consecuencia directa de las operaciones militares estadounidenses.

La invasión y ocupación de Iraq fue y es un acto de agresión ilegal, perpetrado de manera unilateral, al margen de la comunidad de naciones representada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Durante la misma, se cometieron probados Crímenes de Guerra y contra la Humanidad, entre ellos, ataques deliberados a la población civil, uso de armamento prohibido por convenios internacionales de los que los Estados integrantes de la Coalición son suscriptores, como son el armamento convencional revestido de uranio empobrecido, las bombas de fragmentación o de racimo, y agentes como el fósforo blanco y similares.

La ocupación de Iraq es, por tanto, contraria a la legalidad internacional.

Las tropas de ocupación son responsables de crímenes contra la Humanidad al repetir bombardeos indiscriminados contra población civil, la desaparición y asesinato selectivo de profesores universitarios, la realización de detenciones indiscriminadas y mantener condiciones de detención contrarias a convenciones internacionales, hecho demostrado en el caso de las torturas en la prisión de Abu Ghraib y presumible en otros centros de detención. Son asimismo responsables de ataques a la libertad de prensa e

información por el cierre de medios de prensa, e incluso de ataques deliberados a medios presentes en Iraq.

La ocupación ha agudizado las condiciones de vida empeorando notablemente en todos sus aspectos:

-
- La tasa de mortalidad global se ha multiplicado por 2,5. La tasa de mortalidad infantil es ahora el doble que antes de la invasión.
-
-
- La malnutrición infantil se ha duplicado, alcanzando el 7%, lo que supone que 400.000 niñas y niños iraquíes sufren desnutrición aguda.
-
-
- Se constata un colapso de los servicios básicos. La mayor parte del territorio iraquí carece de agua potable y el suministro de energía eléctrica se interrumpe una media de dieciséis horas diarias.
-
-
- El sistema sanitario iraquí es incapaz en este momento de dar asistencia adecuada a la mayoría de la población.
-
-
- La mujer iraquí está viendo cómo se esfuman a gran velocidad todos los logros por los que habían trabajado durante décadas. La inseguridad, la violencia, la instigación interesada por parte de los ocupantes de los sectores más reaccionarios de Iraq y el ataque directo y premeditado a su dignidad —detenciones, abusos, torturas y violaciones— por

parte de las tropas de ocupación y las fuerzas armadas y policía iraquíes asociadas a las mismas, están devolviendo a las mujeres de Iraq a la situación anterior a la revolución anticolonial, una situación comparable a la que viven en los regímenes árabes aliados de occidente.

-
-
- El sistema educativo, reconocido como ejemplar por NNUU antes de la imposición de las sanciones y de la invasión, está siendo desmantelado.
-
-
- La economía iraquí está siendo transformada en economía de mercado ultraliberal de manera acelerada, a través de la privatización tanto de los recursos nacionales como de los mismos servicios básicos, incluido el sistema sanitario. La tasa de paro se sitúa entre el 60 y el 80% de la población en edad laboral.
-

Los responsables políticos de las fuerzas de la ocupación han impuesto unas estructuras políticas al amparo de esta ocupación, estructuras que han determinado un supuesto referéndum constitucional y unas elecciones generales cuyo fin es legitimar la actual situación de ocupación.

Según el Derecho Internacional la ocupación resultante de un conflicto armado es una situación de hecho. Su existencia o inexistencia no depende de una declaración formal, ni siquiera por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Toda institución o estructura surgida de, o al amparo de la ocupación carece por tanto de legitimidad

Por todo lo expuesto, el Grupo de IULV-CA de la Diputación de Granada presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

1. Rotundo rechazo de la invasión y ocupación de un Estado soberano como es el de Iraq, y solicitar la retirada inmediata de las tropas de ocupación y la devolución al pueblo iraquí de la soberanía que le corresponde.
2. La solidaridad con el pueblo iraquí, afirmando el derecho que le asiste de determinar su propio futuro en ausencia de injerencias externas así como el reconocimiento y apoyo a la legítima resistencia del pueblo iraquí a la ocupación.
3. El no reconocimiento del actual gobierno ni de ninguna institución que surja, sea instaurada o promovida por las entidades de ocupación, rechazando, por tanto, toda estrategia o maniobra cuyo fin sea legitimar la actual situación de ocupación.
4. La denuncia de los Crímenes de Guerra y contra la Humanidad cometidos por las fuerzas ocupantes, tanto durante la invasión del país como en el periodo de ocupación.
5. La salida del país de toda entidad extranjera llegada al mismo al amparo de la ocupación, incluyendo empresas, sociedades, y organizaciones cuyo único fin sea el lucro obtenido a partir del expolio de la riqueza de Iraq, que sólo al pueblo iraquí corresponde.
6. La intervención de la comunidad internacional para la resolución del conflicto sobre la base del fin de la ocupación y la devolución de la soberanía al pueblo iraquí.

La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2006 dictaminó favorablemente la propuesta formulada.

Abierto el turno de intervenciones por la Presidencia, interviene

Don Julio Bernardo Castro, exponiendo que el pasado día 20 hizo tres años de la ocupación de Iraq por las tropas de EE.UU. y algo más de tres años se producían manifestaciones multitudinarias cuando Estados Unidos y el Gobierno del Sr. Arznar nos decían que se disponía de armas de destrucción masiva. La realidad es que tres años después lo que allí había era petróleo y que las armas de destrucción se han convertido en la gran mentira masiva, que nos engañaron a todos y tres años después lo único que hay son 6.000 personas muertas, 800.000 heridos, y después de haber visto las barbaridades que se han hecho por las tropas de EE.UU y las inglesas, la realidad es que la tasa de mortalidad en Irak se ha multiplicado por 2'5; malnutrición infantil se ha duplicado, alcanzando el 7%; que el sistema sanitario es incapaz de dar asistencia adecuada a la mayoría de la población; que la mujer iraquí está viendo como se esfuman los avances conseguidos anteriormente; que el sistema educativo reconocido como ejemplar está siendo desmantelado ... Por tanto la acción para salvar al pueblo iraquí de las garras del dictador y salvar a todos de las armas de destrucción masiva se ha convertido en la explotación del petróleo que tiene Iraq. Por todo ello Izquierda Unida propone al Pleno la adopción de los acuerdos transcritos en la Moción.

El Portavoz del Grupo Popular, Don Antonio Granados dice que comprende perfectamente la estrategia de Izquierda Unida como Grupo Político, actualmente no tiene discurso y tiene que recurrir a esta magnífica moción, en donde el Grupo Popular puede estar de acuerdo en algunos puntos, en otros no y en otros este Pleno carece de competencia en sobre todo en una moción tan amplia como la que presenta Izquierda Unida. Por lo tanto el Grupo Popular anuncia su abstención sin entrar en más debate, por considerar mucho más importantes otros debates como el anterior a esta Moción, o el de caminos rurales ... y sin darle la espalda a la propuesta de IU, reitera que considera que este Pleno no tiene competencia sobre la misma.

El Portavoz del Grupo Socialista, Don Gabriel Cañavate Maldonado señala que el responsable de que las propuestas o mociones vayan a Pleno la tiene el Presidente y este Equipo de Gobierno y de hecho, ni una sola de las propuestas de los distintos grupos políticos, no ha sido incluida en el orden del día, cosa que no pasa

en el Ayuntamiento de Granada por ejemplo. Este Pleno ya condenó la ocupación de Irak en una moción conjunta de IU y el PSO y es evidente que este Grupo va a apoyar esta moción. Pero además, es que es evidente y quiero recordarles a los señores/as Diputados/as que en aquel momento cuando se presentó la moción, es que estaban las tropas. Por lo tanto anunciar nuestro voto a favor como no podía ser de otra forma.

En un segundo turno de intervenciones el Sr. Bernardo Castro dice que entiende que al Grupo Popular no le interese que se trate esta moción y si ellos fueran equipo de Gobierno en esta Diputación está seguro de que la moción no se estaría tratando en el Pleno en este momento, como así lo harán en los Ayuntamientos donde gobiernan, como por ejemplo en el de Granada. Igualmente entiende que a ellos no les guste que se denuncien los crímenes de guerra que se están cometiendo con el apoyo del gobierno español, no con el apoyo de la sociedad española que se manifestó en la calle.

El Sr. Granados replica que el Partido Popular no ha cohabitado nunca en un régimen de dictadura, el Partido Comunista sí lo ha hecho y el Sr. Bernardo no sabe si este Grupo va a traer no esta moción. El Grupo Popular defendió en su día que se pudieran debatir todas las mociones en una reunión de los tres portavoces. Comprendo, dice, que el Sr. Bernardo tenga un debate político pero no juegue a ser un iluminado con este Grupo Político en este Pleno.

El Sr. Bernardo puntualiza que él puede introducir en su debate político lo que quiera y que se remite a la intervención que ha tenido el Sr. Granados.

La Presidencia cierra el debate haciendo constar que la Ley de Grandes Ciudades, que afecta a esta Institución, permite a la Presidencia considerar o no de interés un punto y considerarlo bien moción, bien proposición, ruego o nada, y dejarlo fuera. Por tanto no es por acuerdo de la Junta de Portavoces sino porque la

Presidencia permite que se debatan todas las mociones.

Acto seguido somete a votación la Moción, siendo su resultado como sigue:

Votos a favor: 15 (IULV-CA-PSOE)

Votos en contra: ninguno.

Abstenciones: 11 (PP)

Por consiguiente, el Pleno, por mayoría, ACUERDA:

1. Rotundo rechazo de la invasión y ocupación de un Estado soberano como es el de Iraq, y solicitar la retirada inmediata de las tropas de ocupación y la devolución al pueblo iraquí de la soberanía que le corresponde.
2. La solidaridad con el pueblo iraquí, afirmando el derecho que le asiste de determinar su propio futuro en ausencia de injerencias externas así como el reconocimiento y apoyo a la legítima resistencia del pueblo iraquí a la ocupación.
3. El no reconocimiento del actual gobierno ni de ninguna institución que surja, sea instaurada o promovida por las entidades de ocupación, rechazando, por tanto, toda estrategia o maniobra cuyo fin sea legitimar la actual situación de ocupación.
4. La denuncia de los Crímenes de Guerra y contra la Humanidad cometidos por las fuerzas ocupantes, tanto durante la invasión del país como en el periodo de ocupación.
5. La salida del país de toda entidad extranjera llegada al mismo al amparo de la ocupación, incluyendo empresas, sociedades, y organizaciones cuyo único fin sea el lucro obtenido a partir del expolio de la riqueza de Iraq, que sólo al pueblo iraquí corresponde.
6. La intervención de la comunidad internacional para la

resolución del conflicto sobre la base del fin de la ocupación y la devolución de la soberanía al pueblo iraquí.

10º.- MOCIÓN DEL GRUPO IULV-CA SOBRE RETIRADA DEL NOMBRAMIENTO A LA DUQUESA DE ALBA.

De acuerdo con lo establecido en el ROF, Don Julio Bernardo Castro, Diputado Provincial del Grupo IULV-CA, presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN:

RETIRADA DEL NOMBRAMIENTO A LA DUQUESA DE ALBA

Cayetana Fitz-James Stuart (Duquesa de Alba), la mayor poseedora del mundo en títulos aristocráticos y nobiliarios, veinte veces Grande de España, con un patrimonio multimillonario en palacios, empresas, negocios y cortijos, propietaria de 34.000 hectáreas de tierra, por las que recibe anualmente una fortuna en subvenciones de 1.885.000 euros (unos 314 millones de ptas.), procedente de los fondos agrícolas comunitarios, ha sido nombrada "*Hija Predilecta de Andalucía*" el día 28 de Febrero por el Sr. Chaves y su gobierno.

Según dicen en la Junta: "*esta señora es merecedora de tal distinción por su labor como activa embajadora de las tradiciones y costumbres de Andalucía*". Debe referirse el gobierno del PSOE-A a que la Duquesa representa más que nadie "*la tradición y costumbre*" de ser todavía Andalucía un santuario intocable de grandes señoritos, aristócratas y terratenientes, principal causa de su atraso histórico. Cayetana, agradecida, ha declarado: "*Andalucía es lo mas grande que tengo y lo único que me importa*", y lo dice con razón; sus enormes posesiones le dan el privilegio de ser la mayor terrateniente de nuestra tierra, sólo en la provincia de Córdoba tiene 17 fincas.

Esa es la Andalucía que el 28 de Febrero de 1980, millones de hombres y mujeres quisimos dejar en el pasado, aprobando una Autonomía y un Estatuto que iniciara un profundo proceso de libertad, justicia social, progreso e igualdad. Durante estos años el PSOE-A ha venido gobernando casi todo el tiempo con mayorías absolutas, pero enterraron la Reforma Agraria mientras nuestro

himno dice: *"andaluces levantaos, pedid tierra y libertad"*. Pronto comenzaron los juicios, las multas y las condenas de cárcel contra los trabajadores que se atrevieron a levantarse pidiendo tierras, y ahora en contra de lo que prometieron también mantienen el Decretazo que aprobó el PP.

IULV-CA no tiene nada personal contra la Duquesa de Alba, pero sí nos llena de indignación la clase aristocrática, pudiente y privilegiada a la que representa, ya sea conde, duque o marqués. ¿Que tienen que ver las condiciones y la vida diaria de la inmensa mayoría del pueblo andaluz con los intereses de la aristocracia terrateniente?. Los datos publicados por Intermón sobre las fortunas que se llevan éstos a costa de las ayudas comunitarias son escalofriantes. Sólo siete grandes propietarios en Andalucía se embolsan más de 14,5 millones de euros (unos 2.400 millones de ptas.), lo que representa el 25% de las ayudas totales. Por el contrario miles de pequeñas fincas familiares han ido a la ruina.

Los andaluces somos un pueblo trabajador, que ha sufrido como nadie el paro, la emigración y la explotación, en unas tierras que, a pesar de ser las más ricas de Europa, la mitad de su extensión, ha permanecido a lo largo de los siglos en manos del tres por ciento de los propietarios.

El Gobierno ha nombrado Hija Predilecta a la Duquesa de Alba pero sepa que lo hace sin nuestro consentimiento y en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Andalucía.

Mientras el Gobierno del PSOE-A, premia a los ricos, 500.000 trabajadores del campo sin tierra y que viven a base de subsidios esperan que el nuevo Estatuto de Autonomía recoja la soberanía alimentaria y una reforma agraria que dé la tierra, el agua y la semilla a la comunidad que la habita y la trabaja, apueste por la agricultura ecológica y prohíba el uso de transgénicos en el campo andaluz, en el seno de un Estatuto de máximos.

Por todo lo expuesto, se proponen los siguientes ACUERDOS:

1º.- El Pleno de la Diputación de Granada rechaza el nombramiento de la duquesa de Alba como hija predilecta de Andalucía.

2º.- El Pleno de la Diputación de Granada insta al Presidente de la Junta de Andalucía y al Consejo de Gobierno a retirar el

nombramiento de la duquesa de Alba como hija predilecta de Andalucía.

La Comisión Informativa de Presidencia y Acción Política, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2006, dictamina desfavorablemente la propuesta.

Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Bernardo Castro, de IULV-CA, expone que el pasado día 28 el gobierno de la Junta de Andalucía entregó a la Duquesa de Alba el título o la distinción de Hija Predilecta de Andalucía, alegando que esta señora era merecedora de tal distinción por su labor como activa embajadora de las tradiciones y costumbres de Andalucía. Seguramente esta señora, añade, sabrá bailar muy bien las sevillanas pero yo desconozco otras costumbres. Además ella dice que está muy agradecida a Andalucía y que Andalucía es lo más grande que tiene y lo único que le importa. Cómo no le va a importar si solamente en Córdoba tiene 17 fincas; cómo no le va a importar Andalucía si la mitad es suya prácticamente. Todo eso en un ámbito en el que la reforma agraria que se había visto en el anterior Estatuto de Andalucía se quedó parada y en el actual los 500.000 jornaleros que hay sin tierra están esperando contenga algunas cosas como es la propiedad de la tierra para la comunidad que la trabaja, o que haya un banco de semillas en Andalucía y que la soberanía alimentaria sea también propia de Andalucía. En ese ámbito es en el que el gobierno andaluz entrega la medalla de Hija Predilecta a la Duquesa y desde Izquierda Unida lo que proponemos es que este Pleno rechace el nombramiento de la Duquesa de Alba

El Portavoz del Grupo Popular, Don Antonio Granados García cree que la credibilidad de los grupos políticos y de sus políticos es que se marque una línea coherente de actuación. Yo, dice, le voy a decir al Portavoz de Izquierda Unida es que posiblemente al Grupo Popular, no solamente en la Diputación de Granada sino en el Parlamento, el cuerpo le puede pedir abstenerse, no por nada, sino porque la concesión es una Resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, es decir, del Partido Socialista. Con nosotros para nada se ha contado y lo que sí me imagino es que el Partido Socialista de la Comunidad Autónoma a partir de ahora no utilizará el concepto señoritos cuando se refiere al

Partido Popular. Lo que sí quiero indicar es que aunque el cuerpo me pide la abstención, el Grupo Popular va a votar en contra porque creo que mi generación cree que la Andalucía y la España de la pandereta debe de terminar. Cuando existe un acuerdo institucional tenemos que tener una línea de coherencia y de respeto y un órgano que le ha concedido una medalla, me parece una vergüenza institucional, y como andaluz me daría vergüenza, reclamarle ahora desde otra Institución, o desde la misma que se le concede el premio, que lo devuelva. Eso es propio de aquella España de la pandereta y este Grupo Político no puede apoyar que la Granada del Siglo XXI forme parte la Andalucía de la pandereta. Por ello reitero el voto en contra de mi Grupo.

El Portavoz del Grupo Socialista, Don Gabriel Cañavate Maldonado, dice que su Grupo no va a apoyar una iniciativa de este tipo fundamentalmente porque sería una falta de respeto a los acuerdos adoptados por otra Institución.

El Sr. Bernardo Castro contesta al Grupo Popular diciendo que si alguien representa a la España de la pandereta es la Duquesa de Alba. Por tanto están apoyando que se siga potenciando la España de la pandereta. Dice que contaba con que el Partido Socialista y el Popular iban a votar en contra y que la intención de su Grupo es que se sepa que la Duquesa va a tener ese título sin el consentimiento de Izquierda Unida.

No habiendo más intervenciones, la Presidencia procede a la votación de la moción, con el siguiente resultado:

Votos a favor: 1 (IULV-CA)

Votos en contra: 25 (PSOE, PP)

Abstenciones: ninguna.

Quedando rechazada.

11º.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR DE COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA GRIPE AVIARIA.

Don Cecilio Martín García, Diputado Provincial del Grupo Popular, en nombre de este Grupo Político, y al amparo de lo dispuesto en el ROF presenta al Pleno la siguiente MOCION:

"COLABORACION CON LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA GRIPE AVIARIA"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En el BOJA núm. 38 de 24 de febrero de 2006 se ha publicado la Orden de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía de 22 de febrero, en la que se aprueba el protocolo de colaboración entre la Consejería de Agricultura y los Ayuntamientos en materia de prevención y lucha contra la "gripe aviaria".

En dicho protocolo se dispone que los Ayuntamientos procederán a la recogida de las aves muertas en los municipios y las depositarán en bolsas y contenedores con cierre hermético, dejándolas a disposición de la Delegación de Agricultura para su retirada.

La recogida de los cadáveres por los operarios municipales deberá hacerse guardando medidas generales de higiene, tales como la manipulación con guantes protectores, y utilización de mascarillas.

En dicho protocolo se dispone también el procedimiento de notificación que permita al ciudadano informar sobre la aparición de estas aves y la comunicación por los Ayuntamientos a la Delegación de Agricultura.

Siendo conscientes de la necesidad de que las Administraciones

colaboren en esta materia, no podemos compartir el criterio seguido para recaer esta responsabilidad en los Ayuntamientos, atendiendo fundamentalmente a las siguientes razones:

a) Entendemos que dicho protocolo incumple la normativa existente sobre residuos considerados potencialmente peligrosos:

-
- Ley 7/1994 de 18 de mayo de Protección Ambiental (art. 51)
-
-
- Decreto 283/1995 de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Residuos. (art. 28)
-
-
- Orden del ministerio de Medio Ambiente MAM/3042002 de 8 de febrero, BOE núm 43 de 19 de febrero de 2002, por la que se publica la Lista Europea de Residuos.
-

Según esta normativa correspondería a la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la competencia en estos casos.

b) No define cuales son las aves que los Ayuntamientos están obligados a retirar: ¿Aves silvestres, aves domésticas o aves de explotaciones agrarias?.

c) No define tampoco de que lugares deberán retirarse estas aves por los Ayuntamientos: ¿del medio urbano o también del medio natural?

d) No tiene en cuenta las limitaciones y las carencias materiales y

de personal de las Entidades Locales.

e) Tampoco lo referente a la formación de los empleados y responsables, ni se prevé un plan en este sentido.

f) No se definen tampoco los recursos presupuestarios que los Ayuntamientos van a disponer para este cometido.

Considerando que la Diputación Provincial no puede ser ajena a esta problemática y teniendo en cuenta precisamente las limitaciones de los Ayuntamientos de la provincia, el Grupo Popular propone al Pleno para su aprobación las siguientes propuestas de ACUERDO:

1. Instar a las Consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura de la Junta de Andalucía para que el plan de prevención y lucha contra la "gripe aviaria":

- Recoja unos criterios claros sobre las competencias de las distintas administraciones en esta materia, teniendo en cuenta la legislación que le es de aplicación.
- Se dote presupuestariamente este plan, compensando a todas las Entidades Locales los gastos derivados del mismo.
- Conlleve la dotación a los Ayuntamientos del asesoramiento y de los medios materiales necesarios para este fin.
- Establezca un plan de formación para el personal encargado de estas misiones.

•

1. Que por la Diputación Provincial y dentro de los objetivos y el marco que establece el Plan Director de Recogida de

Residuos Sólidos Urbanos se proceda a la contratación de una empresa especializada para la recogida de estas aves, poniéndose al servicio de los Ayuntamientos que así lo requieran, tanto en lo referente a medios materiales como humanos.

2. Que por la Diputación Provincial se establezca también un plan de asesoramiento y formación para aquellos responsables municipales y personal encargado de realizar estos cometidos.

9. Consta en el expediente dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Presidencia y Acción Política en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2006.

- 10.

11. Abierto el turno de intervenciones por la Presidencia, el Sr. Martín García dice que su Grupo ha propuesto esta moción de colaboración con los Ayuntamientos ya que como se ve en la misma, en el BOJA de 24 de febrero se publica una Orden de la Consejería de Cultura por la que se aprueba un protocolo de colaboración con los Ayuntamientos, y que por cierto a los Ayuntamientos no se les ha dado parte en un protocolo de colaboración sino una imposición, en materia de prevención y lucha contra la gripe aviaria. En este protocolo se dispone que los Ayuntamientos procederán a la recogida de las aves muertas y las depositarán en bolsas y contenedores con cierre hermético, dejándolas a disposición de la Delegación de Agricultura para su retirada. La recogida se hará guardando medidas de higiene. En este protocolo se dispone también el procedimiento de notificación que permita al ciudadano informar sobre la aparición de estas aves y la comunicación a la Delegación de Agricultura. Entendemos desde mi Grupo y somos conscientes de que las Administraciones tienen que colaborar en esta materia, no podemos compartir sin embargo el criterio que ha seguido la Junta de Andalucía para hacer recaer sobre los Ayuntamientos esta responsabilidad. Lo fundamento principalmente en varias razones; por una parte entendemos que no se cumple la Ley de Residuos al considerar que los residuos derivados de los cadáveres de estas aves son considerados potencialmente peligrosos; se están incumpliendo por parte de la Junta de Andalucía el art. 51 de

su propia Ley, 7/94, de Protección Ambiental, y el art. 28 del Decreto 283/95, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos, al igual que se está incumpliendo lo que ordena la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, 304/02, por la que se publica la lista europea de residuos. Según esta Normativa, sería la Junta de Andalucía por medio de la Agencia de Medio Ambiente la que tiene la competencia en esta materia. Por tanto entendemos que una vez más, y nunca mejor dicho, se le ha echado el mochuelo a los Ayuntamientos. Por otra parte las instrucciones recibidas por parte de los Ayuntamientos no definen que aves son las que deben retirar, si son las silvestres, si son las domésticas, o las de explotaciones agrarias ni de que lugares deben retirarse estas aves por parte de los Ayuntamientos. Tampoco en dicho protocolo se tiene en cuenta las limitaciones materiales y de personal que tienen las Entidades Locales, así como en lo referente a la formación de los responsables y empleados municipales ni se prevé ningún plan en ese sentido. Tampoco se dota de recursos presupuestarios a los Ayuntamientos para llevarlo a cabo. Por todo lo expuesto es por lo que este Grupo propone:

12. Instar a las Consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura de la Junta de Andalucía para que el plan de prevención y lucha contra la "gripe aviaria".
13. Recoja unos criterios claros sobre las competencias de las distintas administraciones en esta materia, teniendo en cuenta la legislación que le es de aplicación.
14. Se dote presupuestariamente este plan, compensando a todas las Entidades Locales los gastos derivados del mismo.
15. Conlleve la dotación a los Ayuntamientos del asesoramiento y de los medios materiales necesarios para este fin.
16. Establezca un plan de formación para el personal encargado de estas misiones.
17. Que por la Diputación Provincial y dentro de los objetivos y el marco que establece el Plan Director de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos se proceda a la contratación de una empresa especializada para la recogida de estas aves, poniéndose al servicio de los Ayuntamientos que así lo requieran, tanto en lo referente a medios materiales como

humanos.

18. Que por la Diputación Provincial se establezca también un plan de asesoramiento y formación para aquellos responsables municipales y personal encargado de realizar estos cometidos.
19. El Portavoz de IULV-CA, Don Julio Bernardo Castro, muestra su conformidad con la propuesta que se presenta por el Grupo Popular y que la Diputación colabore con los Ayuntamientos en un problema que le ha echado encima la Junta de Andalucía, como ocurre a su entender, en numerosas ocasiones. Señala también que él mismo llamó el mismo día que salió la Orden a la Diputada de Medio Ambiente para hacerle ver la importancia de que la Diputación colabore con los Ayuntamientos aunque aún no conoce lo que se va a hacer. Reitera por tanto el apoyo de su Grupo a esta Moción.
- 20.
21. Por el Grupo Socialista interviene la Diputada Delegada de Medio Ambiente, Dña. Yolanda Ibáñez Avila, exponiendo que una vez más por parte del PP se quiere hacer mucho ruido, crear alarma social sin medir las consecuencias que eso puede traer. Nos encontramos, dice, ante un problema de sanidad animal donde el contagio humano es muy poco probable y además hay que tener en cuenta que tanto en Andalucía como en España, de momento, no tenemos el virus de gripe aviaria, pero también es cierto que tenemos que ser cautelares y preventivos, pero a la vez prudentes ya que la alarma puede traer graves perjuicios en explotaciones avícolas. Decía el Portavoz del PP que en ese protocolo no estaban presentes los Ayuntamientos, que no están claras las competencias. Lo que sí es cierto es que lo que se crea por la Comunidad Autónoma ante este problema es una comisión interdepartamental donde están varias Consejerías, Gobernación, Presidencia, Salud, Sanidad y Medio Ambiente y el protocolo que hoy está puesto en marcha es de prevención, desde el punto de vista cautelar y si lo leemos bien no se modifican ningún tipo de competencias que no sea que ya estén en cada Administración y lo que se estipula en dicho protocolo es la recogida de los animales muertos, que es competencia ya de los municipios, es la que se tiene que hacer por parte de la administración local, y por parte de la

administración autonómica es el tratamiento y el traslado de esos animales. Es verdad que estamos en una situación que crea alarma entre los usuarios pero en el momento en que se encuentra un animal muerto, solamente hay que recogerlo y depositarlo en un contenedor. Para eso, desde esta Diputación y es verdad que me llamó el Diputado de IU, desde ese momento la Diputación se puso a trabajar y ha depositado en todos los Ayuntamientos contenedores y un kit especializado para esa recogida, que consiste en guantes, mono, mascarilla ... y la comisión interdepartamental está vigilando continuamente, pero ahora mismo en España no tenemos ningún tipo de problema sanitario en los animales. Hay que ser cautelares y preventivos pero anuncio que no vamos a votar a favor de la moción porque existe esa comisión interdepartamental vigilando, trabajando, haciendo análisis continuamente y como hay que ser preventivos, esta Diputación está trabajando en colaboración con los municipios. Trabajaremos con los municipios que no tengan personal y hemos enviado una carta y un fax a todos los Ayuntamientos haciéndoles saber que para cualquier problema, a través de Resur y de los técnicos daremos respuesta, pero no tenemos más competencia que la que tenemos por ley: la recogida de animales muertos.

22.

23. En un segundo turno de intervenciones el Sr. Martín García dice que debatir en este Pleno no es crear alarma social sino tratar los asuntos que afectan a nuestra provincia y a nuestros Ayuntamientos que representamos. Quizás la alarma social sea salir en el periódico con una nota como salieron ustedes al día siguiente de proponer esta moción, diciendo que ya se había resuelto todo, diciendo que ya estaban los contenedores y los sacos preparados. Nos preguntamos quién sería el de la foto, si era una calle de Armilla o era la calle Tórtola. En cuanto a la alarma social, en la página 6.512 del BOE nº 43, de 2002, dice que serán residuos peligrosos aquellos cuya recogida y eliminación sea objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones. La verdad es que en España no se ha dado ningún caso y ojalá no se dé nunca pero si ya en el propio protocolo nos dice la Junta de Andalucía que tenemos que adoptar medidas y requisitos especiales. Por tanto reitero que es otro mochuelo que han echado a los Ayuntamientos sin dotación

presupuestaria. Bien es cierto que esta Diputación va a asumir la parte más pequeña, de dotar a los Ayuntamientos de unos monos y unos contenedores, aunque entendemos que eso debía pagarlo la Junta de Andalucía porque es su competencia. Agradecer la celeridad en mandar las cartas y los fax a los Ayuntamientos que fue el mismo día que se presenta la moción, esa misma tarde que estaba toda la maquinaria de Resur en funcionamiento aunque no se si por oportunidad política. Seguimos insistiendo en que se necesita dotación presupuestaria, formación para el personal y ser más reivindicativo con la Junta de Andalucía porque es competencia de ellos.

24.

25. El Sr. Bernardo Castro cree que aunque no hay alarma social ante un pájaro muerto los vecinos están llamando al Ayuntamiento y que para recoger ese animal muerto hay que poner en marcha los medios que prevé la Orden de la Junta que vuelve a echar la responsabilidad en los Ayuntamientos, cuando tenía que ser la propia Junta de Andalucía la que se tendría que implicar más en este asunto.

26.

27. El Sr. Cañavate Maldonado contesta al Portavoz del Grupo Popular diciendo que se debería sentir satisfecho por la prontitud porque esa misma tarde estaba todo preparado y se dio respuesta inmediata a toda la provincia. Por tanto, dice, espero que no nos critique porque hemos sido ágiles. Lo que subyace aquí es que desgraciadamente también la producción en este país está bajando, está bajando la venta de aves y no tenemos que incidir, a no ser que se contraste que efectivamente hay algún riesgo para la población. Vamos a colaborar con los ayuntamientos de la provincia y como le decía ayer al Sr. Granados, tengan la tranquilidad porque los Ayuntamientos que no puedan prestar ese servicio, lo hará la Diputación. Finaliza su intervención pidiendo que no se haga demagogia en un asunto tan trascendental.

28.

29. Interviene nuevamente el Sr. Martín García recordando que ya ha mostrado su satisfacción por la celeridad porque se

actuó rápido. Este Grupo es consciente de que todas las administraciones tienen que colaborar en este tema y de que los ayuntamientos deben ser esa primera administración en atención al ciudadano. En cuanto a la alarma social, considera que debatir este asunto no es crear alarma social sino tratar de solucionar los problemas y esto mismo podía haberse hecho sin nota de prensa. Al votar el grupo socialista esta propuesta en contra, se pretende que sean los Ayuntamientos los que asuman este problema, cuando lo que se pretende con esta moción es que la Junta de Andalucía reconsidere el tema. Para terminar dice que el material aún no ha llegado a los pueblos más lejanos.

30.

31. Finalmente la Presidencia procede a la votación. Su resultado fue como sigue:

32. Votos a favor: 12 (PP, IULV-CA)

33. Votos en contra: 14 (PSOE)

34. Abstenciones: ninguna.

35. Quedando rechazada la moción.

36.

37.

38. 12º.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR DE REPROBACIÓN DEL SR. VICEPRESIDENTE TERCERO DON ANDRÉS RUIZ MARTÍN Y REPROBACIÓN Y SOLICITUD DE DIMISIÓN DEL SR. DIPUTADO PROVINCIAL DON JOSÉ LÓPEZ GALLARDO.

39.

40. Don José Antonio Robles Rodríguez, Diputado Provincial del Grupo Popular, en nombre de este Grupo político, y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 82.3 del ROF, solicita que se incluya en el orden del día de la próxima sesión que celebre el Pleno de esta Corporación, la siguiente moción:

41.

42. "Reprobación del Vicepresidente 3º D. Andrés Ruiz Martín y reprobación y solicitud de dimisión del Diputado D. José López Gallardo.

43.

44. Exposición de Motivos

45.

46. El pasado día 23 de febrero el Vicepresidente 3º delegado de área de economía, hacienda y personal, proponía para dictamen y posterior acuerdo de pleno la enajenación de la finca nº 3210 del registro de la propiedad, parcela nº 222 del polígono 15 de Laroles.

47.

48. El segundo punto de la propuesta proponía la adjudicación directa de la finca a Dña. Sacramento López Zurita.

49.

50. Y el tercer punto de la propuesta recogía esa enajenación en 11.745,82 euros.

51.

52. En el propio expediente la jefa de la sección de patrimonio dice "no se puede concluir con certeza que la finca descrita en el Informe remitido por el área de Cooperación Local y desarrollo y la num. 74 del inventario de bienes de la Diputación sean la misma"

53.

54. Hay contradicciones entre la superficie catastral (1.913 metros cuadrados) y la superficie que aparece tanto en la nota simple del registro de la propiedad como en la ficha del inventario de la Diputación Provincial, que ambos casos la superficie es de 2329 metros cuadrados.

55.

56. El informe de la valoración técnica se hace en base a la superficie catastral, cuando parece lógico fiarse de un documento como es el inventario de bienes de la propia

Diputación. En ese mismo informe el técnico aplica a la valoración un coeficiente de 1'80 por expectativas urbanísticas de la finca, pasando la valoración de 3,41 €/m² a 6,14 €/m². Si se hubiera tenido en cuenta la superficie tanto del inventario de bienes de la Diputación, como la certificación registral la valoración de la finca, su valor hubiera estado por encima de los 12.000 euros y por tanto la ley obliga a sacar la finca a subasta.

57.

58. La valoración técnica establece el precio de la finca en 11.74 euros, cuando en la ficha del inventario de bienes de la Diputación establece el precio en venta 27.995,14 Euros.

59.

60. Tras exponer estos argumentos encima de la mesa por parte del grupo popular, en la comisión del pasado 23 de febrero, y que estas contradicciones por el bien de la Corporación debían de ser depuradas, el dictamen fue favorable con los votos de los representantes del grupo socialista, y el grupo popular se opuso a la enajenación como se planteaba.

61.

62. El Grupo Popular denunció ante los medios de comunicación lo que para nosotros era una venta totalmente irregular, porque bajo nuestro punto de vista debía de depurarse el expediente y posteriormente si se decidía enajenar dicha finca, debía de salir a subasta pública.

63.

64. Posteriormente y después de anunciar el portavoz del Grupo Popular el voto en contra de este asunto, nos encontramos la sorpresa que el portavoz del PSOE en Junta de Portavoces, a pesar del dictamen de cinco diputados socialistas en la comisión, (incluido el Vicepresidente 3º), propone dejar el asunto sobre la mesa, alegando desconocimiento del expediente tanto del presidente de la Corporación como del Portavoz socialista.

65.

66. El pasado día 9 de marzo se publica el BOP num. 46 un edict

del Ayuntamiento de Nevada, por el cual el pleno de la corporación de fecha 19 de enero de 2006 acuerda someter a información pública el avance de los trabajos del PGOU de Nevada.

67.

68. Posteriormente el Grupo Popular ha podido comprobar que la finca que se pretendía enajenar, en el avance del PGOU de Nevada se encuentra recalificada como suelo urbanizable dentro del Plan Parcial nº5 para uso residencial y con una edificabilidad global de 1 metro / metro cuadrado.

69.

70. Teniendo en cuenta y dada la condición de concejal del Ayuntamiento de Nevada y Diputado Provincial de D. José López Gallardo, que este Diputado ya conocía el 23 de Febrero del presente año, que esa finca ya aparecía en el avance del PGOU de Nevada recalificada, porque el acuerdo de pleno es de fecha 19 de enero de 2006, y a pesar de ello dictamino favorable la propuesta y propuso la enajenación directa como finca rustica, y oculto a la Comisión el acuerdo del Ayuntamiento de Nevada.

71.

72. Teniendo en cuenta que el Vicepresidente 3º a pesar de todos los motivos expuestos en esta moción, mantuvo su propuesta y la voto favorablemente, y debía conocer igualmente el acuerdo del Ayuntamiento de Nevada.

73.

74. Teniendo en cuenta que se pretendía consumir como ha quedado acreditado un acuerdo lesivo para los intereses Provinciales, porque hemos demostrado que se han impuesto los intereses de una persona por encima de los intereses de la Diputación, el Grupo Popular propone al Pleno:

75.

76. 1.- La Reprobación del Vicepresidente 3º delegado de economía, hacienda y personal, D. Andrés Ruiz Martín por mantener la propuesta claramente lesiva y contraria a los

intereses Provinciales.

77.

78. 2.- La Reprobación y dimisión del Diputado D. José López Gallardo, por apoyar la propuesta lesiva y contraria a los intereses Provinciales a sabiendas de la recalificación de la finca, mentir y ocultar a la comisión el acuerdo del Ayuntamiento de Nevada.

79. La Comisión Informativa de Presidencia y Acción Política, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2006, dictamina desfavorablemente la propuesta.

80.

81. Abierta la deliberación por la Presidencia, interviene en primer lugar Don José Antonio Robles, manifestando en primer lugar la tristeza del Grupo Popular por tener que traer esta Moción a Pleno. Nosotros, dice, nos dábamos por satisfechos con que la finca no se vendiera o se enajenara, como pretendía el Equipo de Gobierno, pero al final los hechos han sido testarudos y nos encontramos con que se promueve la venta o enajenación de una finca por el Diputado López Gallardo en su doble condición de Concejal del Ayuntamiento de Nevada y Diputado, como una finca rústica muy por debajo incluso del valor que aparece en el inventario de bienes, a sabiendas de que en el avance del Plan General Urbano de Nevada aparecía como recalificada, como suelo urbanizable, todo eso con el visto bueno y el voto favorable del Vicepresidente Tercero y cuatro Diputados más. Y como digo los hechos son testarudos y es que el pasado 23 de febrero el Vicepresidente Tercero llevaba una propuesta a la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal para enajenar la finca del inventario 3210 del Registro de la Propiedad.... El segundo punto de esta propuesta recogía adjudicar directamente a dedo la finca a Dña. Sacramento López Zurita y el tercero recogía enajenarla en 11.745 euros, cuando en el propio inventario aparecía con algo más de 27.000 euros y en el expediente la Jefa de Sección de Patrimonio recoge "no se puede concluir con certeza que la finca descrita en el informe remitido por el Área de Cooperación Local y Desarrollo y la número 74 del Inventario de Bienes de la Diputación sea la misma. ..."; por otro lado existen contradicciones entre la superficie catastral

y la del Inventario de Bienes de la Diputación, y la nota simple del Registro de la Propiedad, y no me voy a referir a las numerosas sentencias en que el Catastro no da propiedad y sí lo hace el Registro de la Propiedad. En el propio informe de valoración técnica que se hace, cuando parece lógico fiarse del inventario de bienes de la Diputación que es un documento que habrán hecho los propios técnicos de la Diputación, se valora en función de 1.900 m² y en el informe se hace por el técnico una valoración que dice que por expectativas urbanísticas se le aplica un coeficiente de 1'80. Simplemente con ese precio que se le hubiera puesto, si hubiéramos tenido en cuenta los metros que aparecen en el inventario de bienes y en el Registro de la Propiedad, la finca hubiera estado por encima de los 12.000 euros y hubiéramos tenido la obligación de sacarla a subasta. Tras exponer todos estos argumentos el Grupo Popular en esta comisión, el dictamen fue favorable con los votos del Grupo Socialista. No entendemos la necesidad que tiene la Diputación de 12.000 euros y no sacar la finca a subasta. Nosotros denunciemos esto ante los medios de comunicación y posteriormente en la Junta de Portavoces y se acordó dejarlo encima de la mesa. Nuestra sorpresa fue tal, el día 19 de marzo, cuando se publica un edicto del Ayuntamiento de Nevada por el cual se exponía al público el avance del POU de Nevada; posteriormente este Diputado ha tenido ocasión de comprobar si la finca en cuestión aparecía en ese plan recalificada. El día 23 de febrero el Sr. López Gallardo sabía que el 19 de enero se había aprobado la exposición al público y sabía que esa finca aparecía con uso residencial y también lo ocultó a la Comisión. Por todos estos argumentos no nos queda más remedio que pedir la reprobación del Vicepresidente Tercero que fue el que llevó la propuesta a la comisión, primero porque si no lo sabía era su obligación saberlo y, segundo, porque si lo sabía y mantuvo la propuesta. Igualmente el Sr. López Gallardo conocía que la finca se iba a recalificar y dijo que era rústica, además votó favorable en la comisión. En definitiva, se han puesto los intereses de una persona por encima de los intereses provinciales y como decía al principio, la tristeza nos invade al Grupo Popular porque se han puesto los intereses de una persona encima de los provinciales.

83. A continuación interviene el Sr. Bernardo Castro, de IULV-C/ diciendo que nunca tenía que haber ido a la Comisión la venta de esta finca. El Grupo Socialista mantuvo la venta, en base a los informes técnicos y así lo entendió también su Grupo. El Equipo de Gobierno cuando ha tenido conocimiento de los hechos ha parado el acto administrativo que se iba a producir y por ello el Grupo de Izquierda Unida se da por satisfecho, por lo que no va a apoyar la moción.

84.

85. El Sr. Cañavate Maldonado, Portavoz del Grupo Socialista manifiesta que no se cree la tristeza que hace alusión el Sr. Robles. Explica que cuando el Grupo Popular solicitó que se reconsiderara la postura, este Portavoz en nombre del Equipo de Gobierno y a instancia del Sr. Presidente, retiró del orden del día el expediente. Por lo tanto, que mejor voluntad de solucionar el asunto, dice, lo que ocurre es que ustedes quieren mucho ruido, hasta insultos y les recuerdo como en medios de comunicación culpaban a una señora alegando que tenía vínculos con el Partido Socialista, o vínculos familiares con el Sr. López Gallardo.... He leído y he escuchado de todo pero al día de hoy se puede comprobar que es todo lo contrario. El expediente no es a iniciativa, como usted ha dicho, del Sr. López Gallardo sino que es a iniciativa de la señora Dña. Sacramento Zurita, que por cierto ni este Portavoz la conoce ni ninguno de los miembros del Equipo de Gobierno y eso lo hace el día 10 de juni de 2005; usted me estaba hablando de un avance del 2006; a lo mejor es que esta señora era adivina de las decisiones que pudieran tener el equipo redactor del PGOU de Laroles. Es esta señora la que promueve el expediente con fecha 10 de junio de 2005; asunto plenario y publicación del avance de Laroles, febrero de 206, Es decir, más de 8 meses. La iciciativa de esta señora es legítima y estaba interesada en comprar esta finca porque es la colindante; porque su padre y ella son los que labran esa finca desde hace más de 40 años; porque tiene una servidumbre de paso y por muchos otros motivos y en el expediente figura el certificado de la propiedad preceptivo del Registro de Ugíjar, informe de la valoración de la finca por los técnicos de la Diputación Provincial, informe de la viabilidad de la explotación por los técnicos ingenieros de la Diputación, informe de la Sección de Patrimonio, informe de Secretaría, del Interventor

todo. Por tanto ningún Diputado ha promovido un expediente que a instancia de un particular que en legitimidad y en derecho lo puede hacer y lleva todos los informes técnicos favorables para que se dictamine por la Comisión Informativa. Por eso va el expediente. NO piensen ustedes otra cuestión porque si se tratara de otra cuestión, con la mayoría lo hubiéramos hecho. La primera garantía, en el supuesto de que la parcela se vendiera, dijimos que se haría cuando el Plan General de Ordenación Urbana de Laroles esté definitivamente aprobado y la segunda cuestión era que saldría por subasta pública para que cualquier ciudadano interesado tuviera esa oportunidad, sabiendo que hay una servidumbre de paso de esta señora con respecto a esa finca y cuándo, pues cuando esté terminado el PGOU. Estamos por tanto hablando de unos hechos que no han sucedido y creo que una vez más es un tema de bastante ruido, que habíamos solucionado y habíamos coincidido en dejar este asunto fuera del orden del día, no sobre la mesa sino para que no volviera más hasta que se viera oportuno. Por lo tanto pedir la dimisión de un Diputado que viene trabajando y esforzándose por el turismo de esta provincia, y la reprobación de un Vicepresidente que está poniendo la economía de esta casa más-menos en su sitio con las dificultades que tenemos, no estamos de acuerdo con la propuesta, creemos que no es rigurosa porque no ha habido ni un solo hecho porque no llegó ni a debate.

86.

87. En un segundo turno de intervenciones el Sr. Robles manifiesta que el Portavoz del PSOE tiene cada vez menos memoria. Hace poco, añade, nos ha dicho que quien tiene la potestad de quitar o poner un asunto en el orden del día es el Presidente y por tanto me extraña que retirara la Junta de Portavoces del orden del día. Usted que nos acusa tanto de no leer, debe estar muy ocupado con la macro área que lleva porque los hechos son incontestables porque la nota simple del Registro de la Propiedad la pidió el Diputado Sr. Gallardo en octubre de 2003, no se si algún otro Diputado habrá pedido alguna otra nota simple de la Diputación; yo creo que tenemos funcionarios muy bien preparados para que lo puedan hacer, es decir que no fue la señora la que empezó el expediente ya que lo hizo el Sr. Gallardo en octubre de 2003. Usted nos puede decir que es el Diputado

de Turismo pero estamos hablando de la finca de Laroles, porque yo también le puedo recordar lo de Fitur, recordarle lo de las enfermeras y también lo del 23%, o que las liquidaciones de las cuentas generales no se aprueban en tiempo y forma, o que los proveedores de las certificaciones de obra no se pagan desde hace nueve meses. Pero en definitiva, yo quiero hablar de la enajenación de la finca de Laroles, que el día 19 de febrero estaba recalificada y el día 23 sí se debatió en comisión, no se debatió en Pleno porque precisamente el Partido Popular denunció estos hechos. Y Sr. Cañavate, contéste me lo siguiente: ¿ es cierto que se iba a adjudicar una finca de la Diputación a dedo?; ¿i es cierto que el valor al que se iba a vender era menor del que aparece en el inventario?; ¿es cierto que la valoración del técnico ha incrementado por expectativas urbanísticas?; ¿es cierto que cinco Diputados del Partido Socialista dictaminaron favorablemente en la comisión este asunto?; ¿es cierto que el Ayuntamiento de Nevada acordó el 19 de enero someter a información pública el avance del PGOU de Nevada y que en este avance la finca aparece en el Plan Parcial nº 5 con calificación de residencial?; ¿es cierto que el Sr. Vicepresidente 3º mantuvo su propuesta y la votó a favor?; ¿es cierto que el Sr. López Gallardo conocía el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Nevada y lo ocultó a la comisión votando favorablemente la enajenación?. Estas preguntas solo tienen una contestación, afirmativa. A pesar de eso, cuando nosotros denunciemos los hechos la primera respuesta del PSOE fue una huida hacia delante alegando que el precio de la finca era muy elevado, que nadie estaba interesado, que aquello no era zona de expansión urbanística, incluso se nos retó a que fuéramos a los Tribunales. No fuimos a los Tribunales porque no se consumó la cacicada; ustedes son incapaces de reconocer que se han equivocado y cuando uno se equivoca a sabiendas de que lo está haciendo, como es el caso, no tiene más remedio en política que asumir su responsabilidad. Pero no solo son incapaces de reconocer sus errores sino que tienen la cara dura de decirnos que aunque aparece en suelo urbanizable, que eso no va a ser urbano en el futuro. ¿Ese es el respeto que se tiene a las Instituciones, al Ayuntamiento de Nevada, a la Comisión Provincial de Urbanismo? ¿o es que el Diputado es el Ayuntamiento de Nevada y la Comisión Provincial de Urbanismo?. Para terminar quiero preguntarles si fuera esta finca de ustedes ¿la venderían en 12.000

euros?, si fuera mía, yo no la vendería.

88.

89. El Sr Bernardo Castro hace uso de la palabra para manifestar que considera acertada la decisión del Sr. Presidente de retirar ese asunto del orden del día hasta que el PGOU de Laroles esté terminado.

90.

91. El Sr. Cañavate dice que hay un refrán que dice que no hay mayor mentira que una verdad a medias y el Sr. Robles se ha cargado de verdades a medias. Usted, dice, ha llegado a decir, y constará en acta, además le exigiré en su momento que rectifique si no lo quiere hacer ahora, porque usted ha llegado a decir que la finca estaba recalificada ya como urbana, o como suelo urbanizable y no hay una barbaridad mayor, y eso que usted es Alcalde, que en un avance para sugerencias a la ciudadanía, que usted diga que el planeamiento está aprobado y sabe usted que jurídicamente comienza a partir de la aprobación inicial, cuestión que todavía no se ha hecho y supongo que el Concejal de Laroles y Diputado hoy, es lo que le estaba comentando en días pasados. Le pido por tanto que no diga más verdades a medias porque es una gran mentira y cuando usted acusa a este Portavoz de falta de elegancia, no vuelva usted a llamarnos caciques porque ese apodo que tienen ustedes nunca se lo van a quitar, por más que se empeñe usted. Usted habla de una cuestión que sabe que es fundamental y es la necesidad de hacer un levantamiento topográfico y esa es la diferencia que hay en todas las fincas de este país, eso lo sabe usted. Por otro lado, en el año 2003 el Diputado Sr. López Gallardo era Delegado de Contratación y en esa fecha se pidieron a los Registros de la Propiedad de todas las fincas que tenía la Diputación, no solo de esa. Usted está con el ánimo de demostrar su tristeza cuando sabe que la realidad es que se ha solucionado el problema, que la Diputación no va a vender esa finca y que cuando se vaya a hacer se hará en las mejores condiciones de garantía, tanto para los intereses de la Diputación como para los intereses de los ciudadanos.

92.

93. El Sr. Robles reitera que es cierto que el día 19 de enero el Sr. López Gallardo sabía que ese avance se había aprobado. En cuanto a las preguntas que ha formulado en su anterior intervención, dice que el Sr. Cañavate no le ha contestado a ninguna y que si no hubiera sido por el Grupo Popular hoy esa finca no sería propiedad de la Diputación. Pide a los miembros del Equipo de Gobierno que sean humildes y reconozcan que se han equivocado. Por último pide en este Pleno que se solicite al Ayuntamiento de Nevada para que se incluya dentro del suelo urbano esa finca de la Diputación, que los acuerdos no sean lesivos para los intereses de la provincia y que la subasta sea con luz y taquígrafos.

94.

95. Para cerrar definitivamente el punto, la Presidencia alega que el Sr. Robles ha hecho bastantes preguntas pero que él mismo se ha contestado, por lo que considera que lo demás huelga. No entiende que tratándose de un punto que ante la más mínima duda, cuando el Grupo Popular lo plantea, se retira del orden del día del Pleno, por tanto ni se debate, además del compromiso personal de esta Presidencia en los medios de comunicación, en una nota de prensa, donde si dice que en caso de venderse se hará por subasta pública, eso debería de ser suficiente aval para acabar esta historia y lo demás es ruido. No cuestiona el derecho de pedir dimisiones, reprobaciones, etc., pero esta Corporación no va a vender la finca de Laroles y si se vendiese, por interés público y no perjudicar a terceros, se hará por subasta pública pero no solo esta finca sino absolutamente todo lo de la Diputación se hace así, salvo urgencias que permitan procedimientos negociados. Como en otras ocasiones, vuelve a decir que los cántaros cuanto más vacíos, más ruido hacen.

96. Acto seguido somete a votación la moción, arrojando el siguiente resultado:

97. Votos a favor: 11 (PP)

98. Votos en contra: 15 (PSOE, IULV-CA)

99. Abstenciones: ninguna.

100. Por consiguiente se rechaza la Moción.

101.

102.

103.

104. 13º.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA, JUNTA DE GOBIERNO Y DIPUTADOS.

105.

106. Se da cuenta por mí, el Secretario General, de que las Resoluciones dictadas desde el anterior Pleno ordinario figuran extractadas en las actas de las sesiones de Junta de Gobierno de fechas 7, 14 y 21 de marzo de 2006, que comprenden las Resoluciones números 0571 al 1105, habiéndose remitido las actas a todos los Sres. Diputados de cada Grupo Político, dándose, en consecuencia, cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62 del ROF.

107.

108. El Pleno acuerda quedar enterado.

109.

110.

111. 14º.- DAR CUENTA DE SENTENCIAS O RESOLUCIONES JUDICIALES.

112.

113. Se da cuenta de las siguientes:

114. Sentencia nº 37/06, de 2 de marzo, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número Tres de Granada, recaída en el Procedimiento Abreviado número 93/05, a instancia de Don Juan Manuel Gálvez Cabrera contra Resolución desestimatoria de reclamación por responsabilidad patrimonial Parcialmente desfavorable.

115. Sentencia nº 272/06, de 31 de enero, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el Recurso de Suplicación nº 2050/05 contra

Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Siete de Granada interpuesto a instancia de D. Antonio Guzmán Úbeda, sobre reclamación de la cantidad en concepto de trienios contra la Diputación de Granada. Favorable.

116. Acta de conciliación de 8 de febrero, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Nueve, recaída en el Procedimiento nº 1084/05, seguido a instancia de D^a Antonia Jiménez García sobre responsabilidad patrimonial. Sin acuerdo entre las partes.

117. Auto nº 48/06, de 15 de febrero, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de Granada, recaído en el Procedimiento nº 758/05, seguido a instancia de Comisión Obrera de Andalucía contra las Bases reguladoras de proceso selectivo de provisión de plazas de funcionarios de carrera mediante promoción interna para laboral fijo. Se declara terminado el procedimiento.

118.

119. El Pleno acuerda quedar enterado y que se ejecuten en sus propios términos las citadas sentencias.

120.

121.

122. 15º.- ASUNTOS DE URGENCIA.

123.

124. No se presenta ningún asunto de urgencia por los señores/as Diputados/as.

125.

126.

127. 16º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

128.

129. En el apartado de ruegos y preguntas, intervienen los siguientes señores Diputados:

130.

131. Don José Antonio Robles Rodríguez, del Grupo Popular:

132. Pregunta al Sr. Diputado de Economía y Hacienda si se le ha puesto al cobro los recibos impagados del año 2003, 2004 y 2005. Si es afirmativa la contestación pregunta en qué fechas se han puesto al cobro los recibos y si fuera negativa, que diga el motivo.

133.

134. Don Antonio Granados García, del Grupo Popular:

135. Hace unas fechas remitió una nota interior de servicio preguntado el motivo por el cual no se había firmado aún el Convenio de construcción de 124 viviendas de protección oficial con el Ayuntamiento de Huétor Vega. Como no ha recibido respuesta, ruega que le remita la información al Grupo ya que lleva pendiente de firma 6 meses en esta casa y está firmado por el Alcalde.

136.

137. Don Antonio Carvajal Pérez, del Grupo Popular:

138. Sobre el traslado a la nueva sede de la Diputación:

139. Existe un malestar y preocupación entre los trabajadores y sus representantes por las condiciones en las que se está produciendo el traslado a la nueva sede de esta Diputación Provincial.

140. Las condiciones de habitabilidad y uso del edificio y su entorno dejan mucho que desear.

141. En consecuencia formulamos al Pleno la siguientes PREGUNTAS:

- 1.
2. ¿Se ha producido la certificación final de obra?.
- 3.

- 4.
5. ¿Está oficialmente recepcionado este edificio por esta Corporación municipal?.
- 6.
- 7.
8. ¿Dispone el Grupo de Gobierno de certificado de primera ocupación? ¿Y la licencia de actividad?.
- 9.
- 10.
11. ¿No considera el Sr. Presidente o el Grupo de Gobierno que el traslado se ha realizado prematuramente y de forma precipitada?.
- 12.
- 13.
14. ¿Considera el Sr. Presidente que el estado actual del edificio se ajusta a la normativa sobre seguridad laboral y prevención de riesgos?.
- 15.
- 16.
17. ¿Se ha exigido a esta Diputación por la Junta de Andalucía indemnización económica por el incumplimiento del convenio?.
- 18.
- 19.
20. Caso de producirse algún hecho no deseado ¿Quién cubrirá esos riesgos?.
- 21.
- 22.
23. ¿Exigirá el Sr. Presidente o el Equipo de Gobierno responsabilidades por el incumplimiento de los plazos en la entrega

del edificio?
24.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Excmo. Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas y cuarenta minutos de este día, de todo lo cual como Secretario General certifico.

EL SECRETARIO GENERAL